

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 7º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-12102-2015
CARATULADO	: RUDOLPH/EMPRESA ELECTRICA

Santiago, diez de Febrero de dos mil veinte

VISTOS:

A fojas 1 comparece don Reynaldo Plaza Montero, abogado, en representación convencional, en su calidad de mandatario judicial, de San Felipe S.A., (antes Constructora San Felipe S.A.), y en adelante, indistintamente la “Constructora”, sociedad del giro del giro de la construcción, ambos domiciliados para estos efectos en calle Cerro Los Cóndores N° 121, comuna de Quilicura, Región Metropolitana, interponiendo demanda civil de indemnización de perjuicios, por responsabilidad civil en sede contractual en contra de Empresa Eléctrica de Aisén S.A., también denominada en adelante "Edelaysen", sociedad anónima del giro de su denominación, representada por su gerente general, señor Francisco Alliende Arriagada, ignoro profesión u oficio, o por quien haga sus veces, ambos domiciliados en Avenida Isidora Goyenechea N° 3621, Piso 20, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, según los antecedentes de hecho y de derecho que expone.

Comienza su exposición indicando que con fecha 22 de agosto del año 2012, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, mediante Resolución N° 122 otorgada a favor de Constructora San Felipe S.A. -hoy San Felipe S.A.-, aprobó: ”los Antecedentes Generales y Descripción del Proyecto, Plano de Ubicación, Especificaciones Técnicas Generales y Especiales, Cubicaciones Informativas y Ubicación de Obras, Planos, Presupuesto, Programa de Trabajo, Programa Mensual de Inversiones, Análisis de Precios Unitarios, Detalle de Gastos Generales y Utilidades y el Convenio Ad-Referéndum de fecha 08 de Agosto de 2012, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO CAMINO



Foja: 1

LONGITUDINAL AUSTRAL RUTA 7 (OBRAS BÁSICAS), SECTOR LÍMITE REGIONAL - LA JUNTA, TRAMO 1: LIMITE REGIONAL - LA TOLVA, KM. 310,00 - KM. 332,004; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN", por un valor ascendente a la suma de \$10.452.615.878.- (I. V. A. incluido).

Asimismo, agrega que la misma institución pública dictó mediante la Resolución N° 123 otorgada a favor de la demandante, que aprobó: "los Antecedentes Generales y Descripción del Proyecto, Plano de Ubicación, Especificaciones Técnicas Generales y Especiales, Cubicaciones Informativas y Ubicación de Obras, Planos, Presupuesto, Programa de Trabajo, Programa Mensual de Inversiones, Análisis de Precios Unitarios, Detalle de Gastos Generales y Utilidades y el Convenio Ad- Referéndum de fecha 08 de Agosto de 2012, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO CAMINO LONGITUDINAL AUSTRAL RUTA 7 (OBRAS BÁSICAS), SECTOR LÍMITE REGIONAL - LA JUNTA, TRAMO 2: LIMITE REGIONAL - LA TOLVA, PUENTE SENADOR SERGIO SEPULVEDA, KM. 332,004 - KM. 345,501; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, por un valor ascendente a la suma de \$7.221.823.475.- (I. V. A. incluido).

Señala que ambas resoluciones administrativas se sometieron al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, hecho que se realizó con fecha 12 de septiembre del año 2012. Afirma que se desprende de estos actos que su representada se adjudicó dos obras contiguas; la primera, que se denomina "Tramo 1", y la segunda que se denomina "Tramo 2". Ambas obras están ubicadas en el Camino Longitudinal Austral, denominada "Ruta 7".

Añade que para la realización de los trabajos encomendados por el Ministerio de Obras Públicas, se debían trasladar una serie de postes de propiedad de Empresa Eléctrica de Aisen S.A., la demandada. Debido a lo anterior, sostiene que con fecha 18 de diciembre del año 2012, su representada le envió una carta a Edelayson, en específico al Sr. Denny Vargas, encargado comercial de proyecto, señalándole que se entregaba toda la documentación solicitada, para efectos del traslado de postación. Destaca que la información enviada dice relación con aquella necesaria para



Foja: 1

llevar a efecto los "valores pro forma", que son definidos por el numeral 40 del artículo 4° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas -en adelante RCOP- contenido en el Decreto Supremo MOP N° 75 del año 2004.

Afirma que luego de ser recepcionada la carta y la documentación adjunta, la demandada le envió los presupuestos para el traslado de línea de media tensión "Santa Lucía" I y II. Asegura que después de aquello, esta información fue remitida al Inspector Fiscal de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Este último, ordenó su corrección ya que se modifican parcialmente los postes involucrados en el traslado de la línea de media tensión. Aclara que esta situación es comunicada a Edelayesen, mediante carta de 22 de Marzo de 2013 para el "Tramo II", y mediante carta de 26 de Marzo de 2013, para el "Tramo I", solicitándosele, en las mismas, el envío de la cotización respectiva, que fueron aprobadas por la Dirección de Vialidad.

Sostiene que la demandada, una vez que recibió toda información pertinente, se comprometió en un plazo de 120 días ejecutar los trabajos de traslación de postes, es decir, Edelayesen se comprometió que dichas labores debían comenzar en el mes de septiembre del año 2013, sin embargo, no las inició sino en noviembre de 2013.

Seguidamente, explica que luego de estos hechos, se perdió toda comunicación existente con la demandada, expresando que no se recibió ninguna información respecto del estado del avance del cambio de postación, ni menos, de su retraso. Asimismo, explica que su representada comenzó una serie de solicitudes de aumento de plazo de Hito y del Contrato, las que tenían como fundamento la demora en la ejecución del traslado de los postes y el tendido eléctrico por parte de la demandada.

Luego, asegura que con fecha 7 de marzo del año 2014, se informó a la Dirección de Vialidad el traslado de los postes del Tramo II, solicitándose nuevamente una prórroga del plazo. No obstante lo anterior, señala que con fecha 3 de marzo del mismo año, don Leonardo García Godoy, Director Regional de Vialidad, Región de Aysén, mediante el ordinario N° 215, le dio cuanta a don David Hidalgo Díaz, Gerente Comercial de Edelayesen que, a la fecha de dicha comunicación, aún no se concluía el tramo II de



Foja: 1

las obras de cambio de la postación, y que ni siquiera se había empezado en el tramo I dichos traslados.

Menciona que estos hechos afectaron tanto a la imagen de la Dirección de Vialidad y de su representada, teniendo presente que todas las obras de ambos tramos, debían concluir con fecha 6 de abril de 2014. Debido a estos acontecimientos, expone que su representada tenía menos de un mes para concluir los proyectos completos, sin siquiera haberse empezado uno de los trabajos de traslado por la demandada, y estando el otro, incompleto, por la misma empresa.

Explica que Edelayesen recién concluye el tramo I de las obras con fecha 15 de mayo de 2014, mientras que el tramo II fue terminado el 1 de marzo de 2014. En conjunto, las obras demoraron, desde finales de septiembre de 2013, aproximadamente 570 días, sumando ambos períodos de desfase de las operaciones de traslado de postación, tanto por el tramo I como por el tramo II. Agrega que la demandada emitió con fecha 10 de junio de 2014 al Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad, las facturas N° 0464707 y N° 0464708, por el traslado de la postación.

Finalmente, destaca que el tardío traslado de los postes y del tendido de media tensión, generó en la obra adjudicada una demora que provocó, no sólo una pérdida de tiempo y oportunidad, sino que, un mayor costo efectivo en el desarrollo de las obras encomendadas por el Ministerio. Insiste que estos acontecimientos han generado inmensas pérdidas económicas para su representada, que deberán ser compensadas por Edelayesen.

En cuanto al derecho, hace mención a los artículos 1437, 1438 y 1553 del Código Civil, destacando que la demandada cumplió con su obligación con un retraso de casi 8 meses. Así como cita el artículo 1556 del mismo cuerpo legal para indicar la procedencia en el caso sub lite de la indemnización de perjuicios. En el mismo sentido, hace referencia a lo sentenciado por Excma. Corte Suprema en los autos rol 6042-2005 y 14008-2013, en torno a dejar sentada la autonomía de la acción indemnizatoria.

Posteriormente, menciona los requisitos de la procedencia de indemnización de perjuicios en sede contractual, aseverando que estos concurren en el caso de marras. Al efecto, cita el esquema seguido por el



Foja: 1

profesor Alessandri Rodríguez, que indica los siguientes supuestos: a) infracción de la obligación; b) la infracción origina un perjuicio al acreedor; c) infracción imputable al deudor; y d) el deudor se encuentra en mora.

En relación al primer requisito, manifiesta que la demandada ha retrasado con notoriedad el cumplimiento efectivo y exitoso de la obligación que su representado asumió al momento de encomendárseles las obras. Añade que dicho retraso se debe única y exclusivamente al hecho de que Edelaysen tardó aproximadamente 8 meses más de lo presupuestado en hacer el cambio de postación que se requería para llevar a cabo las obras de mejoramiento de rutas.

Respecto al segundo elemento, sostiene que es evidente que el tardío efectuar de la demandada provocó serios perjuicios a su representada. Al efecto, señala que estos se verifican en el hecho que las obras del Tramo 1 se terminaron con fecha 15 de mayo de 2014, debiendo haber concluido al menos a finales de diciembre de 2013 y las obras del Tramo 2 terminaron el día 1 de marzo de 2014, debiendo haberlo hecho también a fines de diciembre de 2013. Menciona que los daños se tradujeron en mayores gastos generales y la existencia de costos improductivos de recursos de mano de obra, maquinaria y/o equipos, entendiéndose estos últimos como aquellos costos de recursos humanos y de maquinaria que quedan paralizados o con pérdidas en sus rendimientos preestablecidos en los precios unitarios de oferta.

Luego, desglosa estos conceptos respecto a cada tramo indicando que los gastos y los costos improductivos en el tramo 1 de la licitación señalada asciende a la suma de \$1.225.360.924.-, y el tramo 2 corresponde a la suma total de \$1.302.415.226.-.

Asimismo, explica que su representada ha sufrido un perjuicio extra patrimonial, que consiste en la provocación de una pérdida de reputación para con los usuarios de las carreteras objeto de los trabajos, como con el público en general, en atención principalmente a que las obras debieron haber estado terminadas mucho antes de que la demandada concluyera las suyas. Este evento lo explica atendido la especial concurrencia a la “Carretera Austral”, lugar donde se emplazaron las obras. Añade que tanto la doctrina como la jurisprudencia han comenzado a aceptar la



Foja: 1

indemnización por este ítem a las personas jurídicas que han sufrido este tipo de daños. En ese sentido, cita la opinión del profesor Diez Schwerter y lo dictado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en los autos rol 1791-2014. Reitera que el actuar de la demandada provocó un enorme perjuicio de la demandante, lesionando su buen nombre, fama, imagen y la reputación comercial en más de 30 años de activa vida como contratista del Ministerio de Obras Públicas, avaluando finalmente este tipo de detrimento en la suma de \$400.000.000.-.

En relación al tercer supuesto, señala que el incumplimiento debe ser imputable al deudor, refiere que él se configura, porque Edelayesen retrasó de una manera negligente las faenas a las cuales se comprometió su representada, al no cumplir dentro de los tiempos pactados el cambio de postación materia de estos autos. Además, hace mención a lo dispuesto en el artículo 1547 del Código Civil, el cual consagra la presunción de la culpa contractual. A mayor abundamiento, expone que la negligencia de la demandada se expresa en que Edelayesen se comprometió a desarrollar sus trabajos dentro de los 120 días siguientes a la emisión del presupuesto N° 200/NA-140, de fecha 29 de mayo de 2013, pero recién las inicia en noviembre del mismo año, concluyéndolas con fecha 1 de marzo de 2014 (Tramo II) y 15 de mayo de 2014 (Tramo I).

Finalmente, respecto al último presupuesto, esto es la mora del deudor, arguye que concurre desde que la demanda de autos fue notificada a la contraparte en conformidad a la ley, haciendo mención al artículo 1551 del Código Civil.

Solicita, por tanto tener por interpuesta demanda civil de indemnización de perjuicios por cumplimiento tardío de contrato, y acogerla en todas sus partes, condenando a la demandada, al pago de las sumas ya individualizadas o las que determine este tribunal, que deberán ser reajustadas desde el día de la notificación de la demanda y del pago efectivo de dichas sumas, más intereses corrientes devengados a contar de la notificación del presente libelo, o en subsidio desde la fecha que este tribunal determine, con costas.

En subsidio, interpone demanda civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil en sede extracontractual en contra de Empresa



Foja: 1

Eléctrica de Aisén S.A., también denominada en adelante "Edelaysen", reproduciendo los antecedentes de hecho ya descritos en la demanda principal, y reiterando la petición efectuada a propósito de la demanda principal.

Como fundamentos de derecho cita lo dispuesto en el artículo 41 inciso tercero del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.84, afirmando que aquella disposición obligaba a la demandada a realizar las operaciones de traslado de postación, por un valor pro-forma.

Sostiene que Edelaysen incumplió la obligación legal al realizar de forma tardía las obras encomendadas, quien por su actuar provocó perjuicios que deberán ser reparados por ésta. En el mismo sentido, cita lo consagrado en los artículos 2314 y 2329 del Código Civil para evidenciar que se configura de forma patente la responsabilidad extracontractual de la demandada.

En seguida, y siguiendo la doctrina del profesor Barros Bourie, explica que se configuran todos y cada uno de los elementos que deben verificarse para hacer procedente la indemnización de perjuicios en esta sede, tales son: a) acción libre de un sujeto capaz; b) que la acción haya sido realizada con dolo o negligencia; c) el demandante sufrió un daño; y d) relación causal entre la acción culpable y el daño.

En cuanto a la capacidad del demandante, refiere que el demandado, actuando con absoluta libertad, retraso el traslado de la postación en aproximadamente 8 meses, precisando que la voluntad de las personas jurídicas se expresa por quienes forman parte de sus órganos o actúan como representantes.

En lo atinente a si la acción habría sido realizada con dolo o negligencia, explica que el retraso no ha sido excusado por la demandada, ya que en principio se comprometió en un tiempo determinado pero luego dejó de cumplir. Explica que el cumplimiento tardío es imputable única y exclusivamente a la demandada, toda vez que el Decreto con Fuerza de Ley N° 850 de 1997, dispone que sólo el demandado podría, en principio, llevar a cabo dicha operación, por revestir la calidad de dueño de los postes objeto de la translación.



Foja: 1

Respecto al tercer elemento, manifiesta que los daños se tradujeron en mayores gastos generales y la existencia de costos improductivos de recursos de mano de obra, maquinaria y/o equipos, entendiéndose estos últimos como aquellos costos de recursos humanos y de maquinaria que quedan paralizados o con pérdidas en sus rendimientos preestablecidos en los precios unitarios de oferta. Explica respecto a cada tramo indicando que los gastos y los costos improductivos en el tramo 1 de la licitación señalada asciende a la suma de \$1.225.360.924.-, y el tramo 2 corresponde a la suma total de \$1.302.415.226.-. Insiste que el actuar de la demandada provocó un enorme perjuicio de la demandante, lesionando su buen nombre, fama, imagen y la reputación comercial, avaluando finalmente este tipo de daño en la suma de \$400.000.000.-.

En lo atinente a la relación de causalidad, explica que su representada se veía imposibilitada a continuar con las obras, mientras no se realizara el traslado de la postación, y ella se llevaría a cabo por la demandada. Reafirma lo anterior, citando los dichos del Director Regional de Vialidad, Región de Aysén, expresados en el ordinario N° 215, donde le comunica a la demandada que a la fecha de 3 de marzo del año 2014, aún no se concluía el tramo II de las obras de movimiento de la postación.

En consecuencia, sostiene que se configuran los requisitos de la responsabilidad extracontractual respecto de la demandada para con su representada, solicitando que se condene a indemnizar los perjuicios resultantes del actuar negligente de aquélla, que provocó daño a la demandante.

A fojas 24, se notificó a la demandada la demanda de autos.

A fojas 42, el demandado contestó la demanda e interpuso demanda reconvenzional de indemnización de perjuicios.

A fojas 97, la demandante evacuó el trámite de la réplica.

A fojas 123, la demandante contestó la demanda reconvenzional.

A fojas 132 bis, la demandada evacuó el trámite de la réplica en demanda reconvenzional.

A fojas 133, la demandante evacuó el trámite de la dúplica en demanda reconvenzional.

A fojas 146, la demandada evacuó el trámite de la dúplica.



Foja: 1

A fojas 155, se llamó a las partes a conciliación, la que no prosperó.

A fojas 157, se recibió la causa a prueba, notificándose la interlocutoria a fojas 161 y 162.

A fojas 588, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LAS TACHAS

PRIMERO: El demandado formuló la tacha prevista en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil respecto del testigo Juan Antonio Mellado Gjurinovic, toda vez que de sus dichos claramente aparece que le afecta tal inhabilidad al ser trabajador dependiente de la parte que exige su testimonio;

SEGUNDO: Que al evacuar el traslado, la demandante solicita el rechazo de la tacha, aduciendo que tal causal fue establecida en el siglo veinte cuando los trabajadores no tenían las garantías laborales que hoy las legislaciones les reconoce, por lo que no existe peligros ni presiones de su parte en contra del testigo;

TERCERO: Que, este tribunal adhiere en parte a los argumentos de lo demandante, desde que nuestra actual normativa laboral contempla los resguardos suficientes como para que un trabajador dependiente, pueda comparecer en juicio y declarar en condiciones de imparcialidad suficientes, sobre de hechos que afecten a su empleador, razón por la que se procederá al rechazo de la causal de inhabilidad invocada;

CUARTO: El demandado formuló la tacha prevista en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil respecto del testigo Felipe Andrés Ravanal Parra, toda vez que el declarante expresa ser trabajador dependiente de la empresa San Felipe;

QUINTO: Que al evacuar el traslado, la demandante solicita el rechazo de la tacha, indicando que tal causal fue establecida en el siglo veinte cuando los trabajadores no tenían las garantías laborales que hoy las



Foja: 1

legislaciones les reconoce, por lo que no existe peligros ni presiones de su parte en contra del testigo;

SEXTO: Que por las mismas razones señaladas en el considerando tercero se procederá al rechazo del la causal de inhabilidad invocada;

SÉPTIMO: El demandado formuló la tacha prevista en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil respecto del testigo Luis Alejandro Garcés Puentes, atendido que el declarante señala ser trabajador dependiente de la empresa San Felipe;

OCTAVO: Que al evacuar el traslado, la demandante solicita el rechazo de la tacha, indicando que tal causal fue establecida en el siglo veinte cuando los trabajadores no tenían las garantías laborales que hoy las legislaciones les reconoce, por lo que no existe peligros ni presiones de su parte en contra del testigo;

NOVENO: Que por las mismas razones entregadas en el considerando tercero de esta sentencia, se rechaza la causal de inhabilidad invocada;

DÉCIMO: El demandado formuló la tacha prevista en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil respecto del testigo Orlando Mauricio Manríquez Henríquez, debido a que el compareciente es trabajador dependiente de la parte que exige su testimonial;

UNDÉCIMO: Que al evacuar el traslado, la demandante solicita el rechazo de la tacha, aduciendo que la contraria no ha especificado en que forma acreditaría esta. Sostiene que respecto a los trabajadores dependientes las tachas han sido superadas por el contexto general de la legislación como lo ha reconocido la jurisprudencia. Al efecto, señala que la norma del artículo 358 N° 5 data del año 1983, pero con posterioridad se ha dictado una contundente legislación laboral que protege al trabajador de tal manera que se sienta absolutamente para emitir su declaración.



Foja: 1

Asimismo, explica que el testigo trabajaba para una firma de inspección Obras, la cual está destinada por la administración pública, de tal modo que desempeñaba una función delegada por el estado;

DUODÉCIMO: Que, por las razones expresadas en el considerando tercero de esta sentencia, se procede al rechazo de la causal de inhabilidad invocada;

DÉCIMO TERCERO: El demandante formuló la tacha prevista en el artículo 358 N° 5 y N° 6 del Código de Procedimiento Civil respecto del testigo Patricio Hernán Shaw Silva, toda vez que del testimonio se desprende que el declarante fue dependiente de la empresa demandada por lo menos hasta la fecha de la contestación de la demanda e incluso hasta la presentación de la demanda reconvencional.

Asimismo, sostiene que el testigo fue llamado por el Dpto. Legal de la empresa para la cual trabajaba, con el objetivo de preparar la defensa en relación con la demanda. Añade que se concluye que el testigo carece de imparcialidad debido a que tiene el deber de defender lo determinado para apoyar la defensa de la demandada principal;

DÉCIMO CUARTO: Que la parte demandada solicita que se rechace la tacha interpuesta, atendido que la Excm. Corte Suprema ha resuelto que el vínculo laboral debe ser actual por lo que la tacha carece de fundamento.

Respecto a la tacha contenida en el N° 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, expone que el mismo tribunal superior de justicia ha resuelto que el interés debe ser personal o pecuniario;

DÉCIMO QUINTO: Que, en relación a la causal de inhabilidad establecida en el numeral 5, ha de estarse a lo resuelto en el considerando tercero de esta sentencia, debiendo agregarse que a la fecha en que el testigo declaró ante este tribunal, no prestaba servicios para la demandada, razón por la que resultaría improcedente.



Foja: 1

Que en lo tocante a la causal de inhabilidad N°6, también ha de desestimarse, por cuanto de la declaración del testigo no se desprende el interés que requiere la norma;

DÉCIMO SEXTO: El demandante formuló la tachá prevista en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil respecto del testigo Marcos Joel Herrera Ovalle, debido que de los propios dichos del testigo aparece que existe una relación de dependencia y subordinación entre la empresa demandada y el testigo que presenta, que se traduce en servicios prestados habitualmente;

DÉCIMO SÉPTIMO: Que evacuado el traslado, la demandada afirma que los tribunales superiores de justicia no han acogido esta causal desde el año mil novecientos sesenta. Añade que la jurisprudencia ha indicado que la presión para declarar de una manera determinada no existe en la actualidad, atendido los innumerables derechos laborales que han sido reconocidos.

Agrega que la relación laboral con la demandante reconvencional no perjudica su dependencia y objetividad;

DÉCIMO OCTAVO: Que, por las razones expresadas en el considerando tercero de esta sentencia, se procede al rechazo de la causal de inhabilidad invocada;

DÉCIMO NOVENO: El demandante formuló la tachá prevista en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil respecto del testigo Sergio Antonio Solís Solís, toda vez que de sus propias palabras aparece expresamente su relación de dependencia y subordinación entre Edelayesen y el testigo, ya que habitualmente presta servicios retribuidos a la empresa demandada;

VIGÉSIMO: Que evacuando el traslado, solicita el rechazo de la tachá interpuesta, atendido que los tribunales superiores de justicia no han acogido esta causal desde el año mil novecientos sesenta. Añade que la



Foja: 1

jurisprudencia ha indicado que la presión para declarar de una manera determinada no existe en la actualidad, atendido los innumerables derechos laborales que han sido reconocidos.

Agrega que la relación laboral con la demandante reconvencional no perjudica su dependencia y objetividad;

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, por las razones expresadas en el considerando tercero de esta sentencia, se procede al rechazo de la causal de inhabilidad invocada;

VIGÉSIMO SEGUNDO: El demandante formuló la tacha prevista en el artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil respecto del testigo Sergio Rafael Novoa Espinosa, debido a que ejerce una función importante dentro de una empresa que pertenece al holding en que está involucrada Edelayesen, por lo que queda de manifiesto que tiene un interés directo o indirecto en los resultados del juicio;

VIGÉSIMO TERCERO: Que evacuando el traslado, la demandada principal solicita el rechazo de la tacha interpuesta debido a que el interés demostrado por el declarante debe ser directo o indirecto en el juicio. Asevera que según lo establecido por la jurisprudencia de tribunales, este interés debe ser pecuniario o real, lo que no se desprende de la declaración.

Explica que el testigo ha señalado que es representante legal de la empresa Ingen SPA, compañía que le presta servicios a través de un contrato marco al Grupo Saesa. Sostiene que el acuerdo comercial entre estas dos empresas no afecta la imparcialidad del testigo para declarar en juicio;

VIGÉSIMO CUARTO: Que, de la declaración prestada por el testigo no se desprende que posea un interés de aquel contemplado en el numeral 6 del 358 del Código de Procedimiento Civil, pues no se ve de qué forma los resultados de este juicio puedan afectar sus intereses en calidad de representante de una empresa contratista de la demandada;



II.- EN CUANTO AL FONDO

VIGÉSIMO QUINTO: Que comparece don Reynaldo Plaza Montero, abogado, en representación de San Felipe S.A., (antes Constructora San Felipe S.A.), interponiendo demanda civil de indemnización de perjuicios, por responsabilidad civil en sede contractual y en subsidio en sede extracontractual en contra de Empresa Eléctrica de Aisén S.A., representada legalmente por don Francisco Alliende Arriagada, todos ya individualizados según los antecedentes de hecho y de derecho que expone;

VIGÉSIMO SEXTO: Que a fojas 42, don Paulo Aranguiz Loyola, en representación de Empresa Eléctrica de Aisén S.A. contestó la demanda.

Relata que su representada es concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica en la X y XII regiones, y que por tanto, se rige por las normas contenidas en el DFL N° 1 del Ministerio de Minería de 1982 denominada Ley General de Servicios Eléctricos. Añade que dentro de la zona que le es asignada se emplaza la línea de distribución de energía eléctrica en media tensión denominada “La Junta- Santa Lucía”, construida en la década de los ochenta, encargada por la Comisión de Fomento a Endesa, siendo esta última la que transfiere la propiedad de la Línea a su parte, y otorgándosele el 30 de diciembre de 1996 la concesión definitiva de servicio público.

Luego de referir los términos de la demanda, opone la excepción de falta de legitimación activa de la demandante, señalando que de las resoluciones N° 122 y 123 emitidas por el Ministerio de Obras Públicas, la demandante indica que se desprende la adjudicación de las obras ya descritas por la actora, dejando entrever que no existe certeza respecto al acto de adjudicación del contrato para la ejecución de las obras, por lo que duda respecto a la veracidad de la adjudicación señalada. Además, expone que quien se habría adjudicado las obras sería la "Constructora San Felipe S.A.", que corresponde a una razón social y a una persona jurídica distinta de la demandante "San Felipe S.A. ", y que no tendría relación alguna con



Foja: 1

esta última, toda vez que no ha acompañado antecedentes que demuestren su continuación legal.

Añade que la demandante tampoco indica el Rol Único Tributario de las empresas demandantes, solo se remite a señalar "San Felipe S.A. (antes Constructora San Felipe S.A)".

Seguidamente, señala que la demandante carece de legitimidad procesal o legitimatio ad causam, ya que esta es personal, subjetiva y concreta respecto de un conflicto determinado. Aclara que la legitimación debe existir al momento de constituirse la relación procesal respecto del demandante y del demandado, y determina quienes deben estar presentes en un proceso para que sea posible emitir una sentencia sobre la pretensión que se ha formulado. Reitera que la contraria no tiene legitimidad activa para demandar, toda vez que no es la persona que, de conformidad con la ley sustancial, está legitimada para que, por sentencia de fondo, se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda.

Seguidamente contesta la demanda, para lo cual aborda someramente los elementos necesarios para exista la responsabilidad contractual y el tratamiento de la culpa leve en el Código Civil. Añade que para que exista este tipo de responsabilidad es necesario que concurren los siguientes elementos: a) incumplimiento imputable por parte del deudor; b) la constitución en mora del deudor; c) la existencia de un vínculo causal que una al hecho generador con el daño sufrido por el acreedor; y d) la existencia de un daño sufrido por el acreedor.

En relación al primer elemento, sostiene que no existe una obligación exigible a Edelaysen. Al efecto, indica que Constructora San Felipe S.A. solicitó la elaboración de un presupuesto para el traslado de postes y de la Línea Eléctrica, ubicados a orillas de la Ruta 7, en la comuna de Cisnes. Agrega que dicha solicitud fue efectuada a través de la carta dirigida al Señor Danny Vargas de fecha 18 de diciembre de 2012, recalando que luego de transcurridos 4 meses de haberse adjudicado las obras. A mayor abundamiento, insiste que la elaboración de un presupuesto conlleva el estudio de antecedentes técnicos, geografía de lugar e ingeniería de las estructuras eléctrica que se solicita trasladar cómo también determinar su



Foja: 1

reubicación en algún lugar donde sea técnicamente factible, con los permisos y autorizaciones que correspondan y que son de cargo del solicitante.

Expone que luego de los estudios correspondientes, su representada entregó a Constructora San Felipe S.A. los presupuestos N°200/NA-107, y N°200/NA-108, ambos con fecha 1 de febrero del año 2013, para el traslado de la línea de media tensión Santa Lucía I y II, respectivamente. Afirma que luego de esto, Constructora San Felipe S.A. remitió estos presupuestos al Inspector Fiscal de Vialidad para su aprobación. Asegura que con fecha 22 y 26 de marzo del año 2013, su representada recibió respuesta en cuanto en relación a que Vialidad había modificado el proyecto original.

Añade que no es posible sostener, como lo indica la demandante, que la ejecución de las obras que le mandató el MOP se vieron atrasadas por causa de su representada, toda vez, y tal como lo reconoce el demandante, el día 26 de abril del año 2013, antes de que Edelayesen entregase el nuevo presupuesto, la demandante ya estaba solicitando aumento del plazo al MOP. En síntesis, menciona que a los meses de abril y mayo del año 2013, la demandante ya se encontraba atrasada, por lo que el atraso no puede ser imputado a responsabilidad de Edelayesen.

Posteriormente, indica que su representada debió realizar nuevos estudios para redactar presupuestos actualizados, denominados bajo los nombres N° 200/NA – 136 y N° 200/NA – 140. Agrega que estos fueron remitidos al Señor Mario Fernández, ingeniero de Vialidad, a través de cartas fechas al día 22 y 29 de mayo del año 2013. En el mismo sentido, expone que ambos presupuestos señalan que tienen una vigencia de 90 días corridos desde la fecha de su emisión, y que las obras serán construidas en el plazo de 120 días contados desde que el solicitante, hoy demandante, hubiese dado cumplimiento a todas las condiciones establecidas en el presupuesto.

Manifiesta que la contabilización del plazo señalado anteriormente para la ejecución de las obras, debe ser exigible a partir del día 22 de mayo 2013, para el Tramo II, y del 29 de mayo 2013 para el Tramo I, y no desde el 22 de marzo del 2013 para el tramo II, y desde 26 de marzo del



Foja: 1

año 2013 para el Tramo I, como indica el demandante. Sin embargo -acota- mientras no se cumplan con todas las condiciones contenidas en los presupuestos, entre ellas la aceptación de la oferta, no comienzan a correr los plazos para su parte. Agrega que la oferta de su representada fue aceptada recién el día 19 de marzo de 2014, mediante los ORD. 22 y 23 de la Dirección de Vialidad. Debido a lo anterior, Edelaysen recién con fecha 10 de junio de 2014, pudo emitir facturas y cobrar al MOP, por los trabajos asociados al Tramo I y II, los que fueron oportunamente pagados dentro de los 30 días siguientes. En síntesis, sostiene que su representada ejecutó de buena fe y sin encontrarse obligada, incluso a pesar de no haberse aceptado formalmente los presupuestos, las obras solicitadas por Constructora San Felipe S.A.

Luego, en relación al segundo presupuesto, indica que el deudor no se encuentra constituido en mora.

Asegura que la obligación que pesaba sobre su representada no se encontraba vencida, toda vez que el plazo de 120 días para su cumplimiento, no se había iniciado todavía. Añade que para se iniciara el computo, se debía cumplir conjuntamente a lo menos dos condiciones suspensivas, por un lado la aceptación del presupuesto a través del respectivo oficio ORD, y el pago del presupuesto. En ese sentido, agrega que su representada no se constituyó en mora, pues el plazo no había comenzado a correr; luego, y para el evento de estimarse que el plazo se había comenzado a correr, opone la excepción de contrato no cumplido contemplada en el artículo 1552 del Código Civil, el cual sustenta la excepción de contrato no cumplido, fundada en que el demandado no había cumplido con su obligación de pago.

Seguidamente, expone que no puede estimarse que haya existido culpa y/o dolo por parte de Edelaysen, pues para ello se ha de tener en consideración las circunstancias propias de este tipo de contratos.

Señala que en este tipo de contratos, los traslados de postación y cableado se realizan por tramos, esto es, en la medida que las obras civiles, de cargo de un contratista, van terminando y avanzando, y que el demandante siempre estuvo atrasada en la ejecución de las obras civiles, lo que conllevó que hiciera entrega tardía o retasada, de las zonas de



Foja: 1

trabajo, hecho indispensable para que su representada pudiese ejecutar los trabajos de traslado. Insiste que Edelayesen no pudo ejecutar los trabajos en varias ocasiones debido a que la demandante no cumplió con su obligación, ya que la zona debía entregarse despegada y en forma segura, esto es, sin que en el lugar se estuvieran realizando trabajos de tronaduras. En el mismo sentido, agrega que para realizar los trabajos de traslado, su representada, debía suspender el suministro eléctrico de la línea en cuestión, y que por estar regulada por una serie de exigencias legales, le impedía realizar cortes seguidos de suministro en el mismo sector. Arguye que la demandante durante la ejecución de las obras civiles causó graves daños a la línea eléctrica, lo que ocasionó destinación de recursos materiales y humanos a dichas reparaciones, más que a los respectivos traslados. Asimismo, menciona que la demandante durante la ejecución de los trabajos, y atendidas las circunstancias particulares de la ruta, unilateralmente, varió el trazado o los proyectos eléctricos originalmente presupuestados, en atención a ello, su representada debió trasladar y construir obras eléctricas distintas a aquellas que fueron originalmente convenidas. Atendido lo anterior, los cambios de trazado, realizados por la demandante, implicaron nuevos estudios de ingeniería y planificaciones de trabajo, y consecuentemente un aumento en los tiempos y plazos de ejecución de las obras.

En relación a los perjuicios reclamados, trae a colación los artículos 1556 y 1558 del Código Civil, destacando que la naturaleza de la indemnización de perjuicios es de carácter restitutoria y, en ningún caso, puede ser lucrativa.

En cuanto al daño emergente, manifiesta que los perjuicios demandados no cumplen con ninguna de las exigencias, es decir, el daño no es cierto, directo y no está fehacientemente acreditado. Sin perjuicio de lo anterior, expresa que el daño reclamado es evidentemente desmesurado y poco serio. Respecto al daño moral, afirma que el supuesto daño a la imagen de la demandante no tiene causa en alguna conducta de su representada. Aclara que dicho deterioro se explica en los incumplimientos de la propia demandante y que esta deberá acreditar el daño de imagen que imputa. En efecto, expone que la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha declarado y exigido que todo daño y



Foja: 1

especialmente el daño moral sea significativo. Finalmente, reitera que el daño moral envuelve el carácter de personal, no siendo posible ser ejercido por otra persona que no sea su representante legal o convencional. Insiste que el demandante ha actuado en representación de San Felipe S.A. y no por Constructora San Felipe S.A.

En el primer otrosí, viene en contestar la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual.

Luego de definir la responsabilidad civil extracontractual, advierte que la atribución de una obligación resarcitoria no es automática, sino que es imprescindible la concurrencia de requisitos, que deben reunirse de manera conjunta para que surja la obligación de indemnizar. En ese sentido, aclara que la doctrina ha fijado las siguientes condiciones que deberán concurrir, estas son: a) capacidad del autor del delito o cuasidelito civil; b) culpa o dolo del autor; c) cause un daño; y d) existencia de una relación de causalidad entre el hecho y el daño.

Primeramente, alega la inexistencia de un hecho ilícito y de daños que sean consecuencia de este hecho. Sostiene que la demandante se contradice al señalar en principio que su representada no cumplió con sus obligaciones contractuales y por otro lado, que cometió un ilícito civil que le causó daño. Reitera que el retraso la ejecución de los trabajos por parte de Edelayen, no puede ser lícito e ilícito al mismo tiempo, y no puede sino emanar de una obligación contractual.

Agrega que en relación a los daños materiales imputados, la demandante no precisa de qué forma se manifiestan estos y de qué manera se materializaron, no haciendo un desglose de los mismos ni manifiesta en qué consisten sino que se limita a señalar solamente una suma de dinero. En efecto, arguye que el demandante deberá probar los daños supuestamente infringidos y siempre estando a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil. Aclara que los daños materiales alegados, se han originado en la propia acción negligente de la demandante, por lo que no deben ser reparados. Insiste que el daño moral es de carácter personal y que debe alegarse por el representante legal de Constructora San Felipe S.A. y no por el de San Felipe S.A.



Foja: 1

Seguidamente, indica que no existe una relación de causalidad debido a la existencia de una serie de elementos que liberan de responsabilidad a su representada.

Asevera que excluye la relación de causalidad que el daño se impute a la “culpa de la víctima”. Al efecto, señala que de la propia documentación acompañada por la demandante se desprende una tardanza al momento de solicitar a su representada los presupuestos para el traslado de postes, toda vez que solicitó en marzo de 2013 y un mes después estaba pidiendo ampliación de plazo al MOP para ejecutar las obras, por tanto, ya existía un retraso que se debe exclusivamente a la conducta de la demandante. Asegura que estas actuaciones de la demandante excluyen de culpa a su representado, en especial, la falta de interés y pro actividad de la misma para gestionar las actuaciones pertinentes.

Alega que obliga a descartar la relación de causalidad, el que su representada haya cumplido con emitir los presupuestos y producir los proyectos solicitados, sin perjuicio que el MOP a través de la Dirección de Vialidad no acepto en forma oportuna la oferta remitida, hecho que ocurrió solo en marzo del año 2014. Afirma que su representada no es la causante del daño invocado, toda vez que mientras no conste la aceptación de la oferta y no se cumplan las condiciones establecidas en los presupuestos, no se origina la obligación del traslado de postes.

Finalmente, imputa exposición imprudente de la víctima al daño, solicitando que en caso de acceder a la solicitud de la demandante, dicha demanda sea reducida prudencialmente en su monto. Al efecto, hace mención a lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, indicando que existe una sanción en contra del propio demandante en el caso que su conducta haya colaborado a la verificación de los daños. Reafirma esta situación en el hecho de la falta de comunicación con su representada, no habiendo la actora efectuado actos para mejorarla, así como también imputa no haber realizado actos tendientes a obtener la pronta autorización del MOP.

En el segundo otrosí, comparece Paulo Aranguiz Loyola, abogado, quien en representación de Edelayen interponiendo demanda reconvenzional de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil



Foja: 1

extracontractual, en contra de San Felipe S.A., representada legalmente por don Carlos Felipe Montero Martinez, por las consideraciones de hecho y de derecho que expone.

Luego de mencionar el historial de su representada como empresa concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica, manifiesta que San Felipe S.A. al dar inicio a las obras adjudicadas, efectuó tronaduras mediante la utilización de explosivos, tala de árboles, ensanches de caminos, etc. Debido a lo anterior, asevera que en la ejecución del proyecto, la demandante principal dañó en repetitivas oportunidades, estructuras de la red eléctrica de su representada, e hizo que operaran las protecciones de línea eléctrica producto de los trabajos de tronadura, lo que implicó el despliegue al sector de brigadas y gastos en materiales tendientes a reparar y reponer el suministro eléctrico afectado.

Al efecto detalla 26 eventos ocurridos entre el 9 de octubre de 2013 y 28 de abril de 2013, todos los cuales habrían ocasionado daños a Edelayen.

En cuanto al derecho, cita los artículos 2314 y 2329 del Código Civil para definir el delito o cuasidelito civil y que daño es el que debe indemnizarse.

Posteriormente, detalla los requisitos legales que deben concurrir para que proceda la indemnización de perjuicios, estos son: a) capacidad del autor del hecho ilícito; b) imputabilidad, esto es, dolo o culpa del autor; c) nexo causal, entre el hecho u omisión dolosa o culpable y el daño; y d) existencia de un daño.

En este sentido, agrega que la capacidad constituye la regla general y que el demandante en demanda reconvencional tiene plena capacidad jurídica. En relación a la culpa, cita la opinión del profesor Alessandri para definir este concepto y en ese sentido, recalca que la demandada tiene el grado de profesionalismo y experticia, a efecto de haber tomado las debidas precauciones y resguardos a fin de haber evitado los daños que produjo.

Seguidamente, afirma la existencia del nexo causal, al haber actuado la demandada en demanda reconvencional negligentemente, en la utilización de explosivos, tala de árboles, ensanche de caminos y utilización de maquinaria pesada, lo que ha provocado de manera directa daños en las instalaciones y redes de suministro eléctrico.



Foja: 1

Respecto a la existencia de un daño, alude a los profesores Alessandri, Fueyo y Diez para definir el concepto de daño y enumera los requisitos que deben darse para que este último sea indemnizable. Afirma que estos elementos concurren al producirse daños en las instalaciones y redes de suministro eléctrico.

En relación a la cuantía de los daños materiales, que corresponden principalmente a postes de concreto armado, líneas dañadas, crucetas, transporte, gastos operacionales, etc., piden que sean determinados en la etapa ejecutiva del fallo, según los dispone en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de avaluarlos a “modo ilustrativo” en la suma aproximada de \$31.862.912.-. En cuanto a la cuantía del lucro cesante, constituido por la energía que no pudo suministrar, en la suma de \$28.526.230.-, sin perjuicio de determinarse en la etapa ejecutiva del fallo.

Hace hincapié en el valor de la energía no suministrada (ENS), que corresponde al cálculo de la energía no facturada a los clientes de la empresa Edelayen, cuya obligación de suministro eléctrico está configurada en el DFL-4, Decreto 327 y regulada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Para el cálculo del consumo promedio, se considera la demanda promedio del tramo de alimentador que quedó sin suministro eléctrico durante el tiempo que se realizó la reparación y reposición del consumo;

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que a fojas 97, la demandante principal evacuó el trámite de la réplica en los siguientes términos.

Respecto a la contestación de demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil contractual, reitera todos los hechos y argumentos exhibidos en la demanda de autos, agregando las siguientes consideraciones.

En primer lugar, niega y rechaza todos los argumentos de hecho y de derecho que sustentan las defensas opuestas por la parte demandada, alegando que esta deberá acreditar todo lo expuesto según lo dispone el artículo 1698 del Código Civil. Asimismo, pide el rechazo a la excepción de falta de legitimidad activa alegado, fundándose en el hecho que San Felipe S.A. es la continuadora legal de Constructora San Felipe S.A. y que



Foja: 1

la actora reconvenicional reconoce a San Felipe S.A. como infractora de los daños que imputa.

Seguidamente, expone sí existe una obligación exigible a la demandada principal y que se encuentra contenida el artículo 41 inciso tercero del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 de 1997, en relación a lo dispuesto en el numeral 40 del artículo 4° del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, contenido en el Decreto Supremo MOP N° 75 del año 2004. Asevera que de la anterior norma citada surge la obligación de Edelaysen, consistente en el traslado de la postación. Añade que no solo estaba obligada por la norma en cuestión, sino que también por su propia voluntad, ya que ambas acordaron que la demandada principal se haría cargo del traslado de la postación.

En el mismo sentido, expresa que si bien Edelaysen establecía en su presupuesto que los trabajos no se iniciarían sino una vez pagado el mismo y cumpliéndose por parte de San Felipe S.A. los requisitos de la oferta, esto fue modificado de forma tácita por las partes, debido a que la Edelaysen inició sus trabajos en noviembre de 2013 y cobró después de finalizados los mismos, con las facturas emitidas N° 464707 y N° 464708, pagadas en tiempo y forma.

Luego, sostiene que el retraso del proyecto no fue responsabilidad de su representada, sino que exclusivamente de la demandada principal, tal como lo señala la misma Dirección de Vialidad en el ordinario N° 215 de fecha 3 de marzo de 2014 en el cual don Leonardo García Godoy, Director Regional de Vialidad de la Región de Aysén, le daba cuenta a don David Hidalgo Díaz, Gerente Comercial de Edelaysen que, a la fecha de dicha comunicación, aún no se concluía el tramo II de las obras de cambio de la postación, y que ni siquiera se había empezado en el tramo I dichos traslados. Menciona que estos hechos afectaban en exceso tanto a las obras como a la imagen de la Dirección de Vialidad y de San Felipe S.A., teniendo presente que los tramos I y II debían terminar el día 6 de abril de 2014.

Posteriormente, asevera que Edelaysen sí se encontraba en mora, toda vez que no es efectivo que el plazo para el cumplimiento de las obras nunca haya surgido, ya que el presupuesto de Edelaysen fue modificado de forma



Foja: 1

tácita por las partes, aplicándose lo dispuesto en el artículo 1564 del Código Civil. Afirma que la demandada no puede alegar que no le corrió plazo, atendido que inició las obras de forma anterior al cumplimiento de los requisitos establecidos en el presupuesto, que fue aceptado por su representada y con conocimiento de la Dirección de Vialidad.

En cuanto a la oposición de la excepción de contrato no cumplido, indica que es improcedente, debido a que su representada le pagó por sus servicios, incluso con retrasos, siempre estuvo dispuesto a cumplir. Sin perjuicio de lo anterior, señala que de igual manera debe tenerse en mora a la demandada, procediendo la interpelación judicial, establecida en el artículo 1551 N° 3 del Código Civil.

Respecto a la alegación de la ausencia de culpa y/o dolo por parte de Edelayesen, manifiesta que la demandada actuó con falta de diligencia o cuidado, es decir, con culpa. Al efecto, hace mención al artículo 1547 del cuerpo legal recién citado, aseverando la consagración de la presunción de la culpa contractual. Atendido lo anterior, recalca que la demandada deberá acreditar los siguientes puntos, a saber: a) retrasos en la entrega de las zonas en las que Edelayesen debía trabajar; b) errores en la forma de entrega de las zonas en que debía trabajar la demandada; c) Provocación de daños a la línea eléctrica y; d) variación de los trazados o los proyectos eléctricos originalmente presupuestados.

En el primer otrosí, viene en evacuar el trámite de la réplica, respecto de la contestación de demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, reiterando y ratificando todos y cada uno de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda de autos, sin perjuicio de añadir nuevos fundamentos. En efecto, niega y rechaza todos los argumentos de hecho y de derecho que sustentan las defensas opuestas por la parte demandada, alegando que deberá acreditarlas según lo dispone el artículo 1698 del Código Civil. Asimismo, sostiene que sí existe un hecho ilícito, toda vez que la demandada, como propietaria de las instalaciones eléctricas y de postación, tiene la obligación legal de trasladar tales instalaciones, cuestión que se hizo de forma negligente y sin observancia de la profesionalidad que se espera de una empresa de la magnitud de la



Foja: 1

demandada. Asimismo, asegura la existencia de daños y que serán acreditados en la forma y tiempo que corresponda.

En relación al nexo causal, alega que su representada estaba imposibilitada para continuar con sus obras mientras no se solucionara el problema del traslado de la postación, faenas que se realizaron tardíamente, retrasando el proyecto completo.

Respecto a la alegación del “hecho de un tercero”, asegura que la demandada inició los trabajos de traslación de la postación en noviembre de 2013, cuando debió haberlos iniciado en septiembre del mismo año, esto se consolida de los propios dichos de la demandada de la contestación principal, quien afirma que realizó las obras de forma anterior a esa “aceptación” del presupuesto, sin encontrarse obligada;

VIGÉSIMO OCTAVO: Que a fojas 123, la demandante principal contestó la demanda reconvenzional en los siguientes términos.

Como cuestión previa, niega y controvierte todos y cada uno de los hechos señalados en el libelo por parte de la demandante reconvenzional. Asimismo, afirma que ésta deberá acreditar todos y cada uno de los antecedentes de hecho en los cuales fundamenta su pretensión, todo ello acorde a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil. Arguye que la demandada principal comete un error, ya que la demanda indemnización de perjuicios en sede extracontractual, siendo que en la contestación ha reconocido que ella con su representada tienen un vínculo de carácter contractual. En ese sentido, enumera diversos pasajes de la contestación de la demanda principal, donde la demandada reconoce el vínculo que lo liga a su representada es de índole contractual, configurando una confesión judicial expresa, acorde a lo dispuesto en los artículos 399 del Código de Procedimiento Civil y 1713 del Código Civil, produciendo plena prueba.

Asegura que el actor reconvenzional se equivoca en la causa de pedir, definida por el artículo 177 inciso final del Código de Procedimiento Civil, por lo que debería rechazarse la demanda reconvenzional impetrada.

Seguidamente, opone la excepción perentoria de falta de legitimación pasiva, señalando que su representada no tuvo participación en los hechos que produjeron supuestos daños a la demandante reconvenzional. Asevera



Foja: 1

que la actora reconvencional deberá acreditar la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual que se invocan.

Luego, comienza a detallar de qué manera cada uno de los elementos que propone el profesor Barros Bourie no afluyen en este caso en particular. En efecto, su representada niega la existencia de una acción que haya sido realizada con dolo o negligencia, así como el hecho de que la demandante reconvencional haya sufrido daño o perjuicio, provocados por acciones u omisiones de su representada.

Añade que el único objeto de la pretensión reconvencional es exclusivamente la indemnización de perjuicios y que la reserva de la determinación de la cuantía para la etapa de la ejecución no es procedente en sede extracontractual, tal como lo afirmado la jurisprudencia. Al efecto, cita lo sostenido por la Excma. Corte Suprema en los autos rol 4.666-2007, de fecha 24 de septiembre de 2009.

Respecto de los daños alegados, señala que el daño emergente y lucro cesante deberán ser acreditados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil.

Finalmente, expresa que la demanda reconvencional deberá ser rechazada por ser infundada y temeraria. Igualmente, indica que en caso de acogerse la pretensión de la demandante, no se condene en costas a su parte por haber tenido motivo plausible para litigar;

VIGÉSIMO NOVENO: Que a fojas 132 bis, la demandante en demanda reconvencional evacuó el trámite de la réplica reconvencional en los siguientes términos.

En primer lugar, aduce que la responsabilidad civil extracontractual de reparar el daño causado a instalaciones de propiedad de su representada no tiene su origen en un contrato, sino que se debe a un hecho ilícito imputable al actuar doloso o culposo de la demanda reconvencional. Al efecto, expresa que la existencia de un vínculo contractual entre las partes no impide la comisión de un delito o cuasidelito civil por una de las partes que infiera daño a la otra. Asegura que la solicitud indemnizatoria se basa en la responsabilidad que le cabe a la demandada reconvencional por los



Foja: 1

daños causados en virtud de su actuar ilícito, doloso o culposo, y por la ocurrencia de un daño como consecuencia de los actos ejecutados en la realización de las obras que formaron parte de un contrato existente entre aquella y el MOP, y no por la relación contractual existente entre Edelayesen y la contraria.

Sostiene que lo demandado es el pago de los perjuicios causados por la demandada reconvencional en el ejercicio de labores propias de su giro, específicamente en la ejecución de la obra pública, atendido a que en la realización de dichos trabajos existió culpa, negligencia, imprudencia de parte de la demandada reconvencional y que produjo daño a su representada. En ese sentido, cita al profesor Ramos Pazos para indicar que si se han configurado los elementos para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual.

En relación a la falta de legitimación pasiva imputada por la demandada reconvencional, expresa que los daños causados a las instalaciones eléctricas de propiedad de su representada, fueron causados por la demandada reconvencional mientras ejecutaba las obras correspondientes al proyecto adjudicado por el MOP. Agrega que las interrupciones de suministro eléctrico registradas y sufridas por su representada, fueron causadas en el mismo tiempo y lugares donde la demandada reconvencional era la única empresa que ejecutaba las obras del proyecto mencionado.

En lo tocante a los requisitos legales para que proceda la indemnización de perjuicios, reitera que estos concurren y los explica nuevamente.

Señala que la capacidad constituye la regla general y que en este caso la demandada reconvencional tiene plena capacidad jurídica, por lo que la falta de capacidad debe ser acreditada por quien la alega. Afirma que la acción fue realizada con culpa y dolo, toda vez que es la misma demandada la que se encontraba a cargo de la obra adjudicada, realizando faenas que involucraron el uso de explosivos y maquinaria pesada para ensanchar los caminos existentes, en cuya faja se encontraban las instalaciones eléctricas de Edelayesen que se vieron afectadas por los daños causados, así como los clientes de la misma. Añade que el dolo o negligencia de la demandada



Foja: 1

reconvencional, se tradujo que esta debió haber tomado las debidas precauciones y resguardos a fin de haber evitado los perjuicios que produjo, que consistieron básicamente en la destrucción y detrimento de líneas eléctricas, postes, crucetas, aisladores, conductores eléctricos, y en general equipos e instalaciones eléctricas que formaban parte de la línea eléctrica emplazada en aquellos lugares donde se ejecutaron los trabajos.

Detalla que los daños se ocasionaron en los siguientes tramos: 1) Línea eléctrica y demás instalaciones eléctricas de Edelayesen, emplazadas en faja de la Ruta 7, en el tramo Santa Lucía - Límite Regional; 2) Línea eléctrica y demás instalaciones eléctricas de Edelayesen, emplazadas en faja de la Ruta 7, en el tramo Límite Regional - La Tolva; y 3) Línea eléctrica y demás instalaciones eléctricas de Edelayesen, emplazadas en faja del tramo de la Ruta 7, en el tramo La Tolva - Puente Senador Sergio Sepúlveda. En cuanto a la reserva de la cuantía, menciona que no existe un cuerpo normativo que prohíba determinarla para la etapa de ejecución del fallo.

Asevera la procedencia de la reserva en cuanto a la determinación del monto de los perjuicios, desde que no existe disposición que lo prohíba.

Por último, reitera lo señalado en la demanda reconvencional, en el sentido de que sí existe un nexo causal entre los hechos relatados y los daños efectivamente causados;

TRIGÉSIMO: Que a fojas 133, la demandada reconvencional evacuó el trámite de la dúplica reconvencional, reiterando y ratificando todos y cada uno de los argumentos expuestos en la contestación de la reconvención evacuada.

Sin perjuicio de lo anterior, añade que el vínculo que las une es de carácter contractual, en el cual quedaron contenidas las instalaciones de postes y sus anexos, por lo que los daños supuestamente provocados por su representada son justamente al respecto de ellas, quedando en claro la incongruencia de la demandante reconvencional.

Reitera que la contraria deberá acreditar la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual que se invocan, especialmente la participación de su representada en los supuestos daños provocados, ya que no existe antecedente que permita



Foja: 1

suponer la existencia de los daños, de quién los provocó, si hay o no responsabilidad al respecto y la naturaleza de esta.

Finalmente, opone la excepción perentoria de falta de legitimación activa de Edelayesen en relación a los daños cuya indemnización solicitan, desde que estos afectarían a los clientes de ésta, debiendo acreditar el título que la habilita a demandar dicho acápite;

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que a fojas 146, la demandada principal evacuó el trámite de la dúplica, reproduciendo y reiterando cada uno de los argumentos de hecho y de derecho expuestos en la contestación de la demanda, adicionando las siguientes consideraciones.

Respecto a la falta de legitimación activa de la demandante, expresa que la esta no ha sido capaz de explicar de qué manera se habría encontrado legitimada al momento de constituirse la relación procesal, de qué forma o por qué la demandante San Felipe S.A. sería la continuadora legal de Constructora San Felipe S.A., o de qué forma se habrían cedido derechos litigiosos de Constructora San Felipe S.A. a San Felipe S.A., ni tampoco quien sería el representante legal. Añade que la interposición de la demanda reconvencional no significa que se reconoce la capacidad del demandante, sino que ese supuesto prosperará en la medida que el juez de la causa lo determine.

Seguidamente, expone su representada no desconoce la existencia y la obligatoriedad del artículo 41 del DFL N°850 de 1997, en relación al artículo 40 N°4 del Reglamento para contratos de Obras Públicas, contenido en el DS N°75 del año 2004 del MOP, pero sostiene que debe interpretarse estrictamente. Agrega que su representada también se encuentra obligada a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°932, de fecha 30 de diciembre del año 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que le otorga la concesión eléctrica y el derecho a usar caminos, calles y otros bienes nacionales de uso público, en relación a la línea eléctrica de 23 Kv Santa Lucía – La Junta. Asevera que, en virtud de aquel decreto, su representada está facultada para hacer uso de las fajas de aquellos caminos, pero solo en la forma que se autorizó en el referido decreto y, no siendo facultativo para Edelayesen poder trasladar las



Foja: 1

instalaciones eléctricas, líneas y postes, a una parte del camino que no haya sido autorizado en el referido decreto concesional o en otro posterior, o en virtud de algún acto de autoridad facultada para ello. Aclara que cualquier traslado a una ubicación distinta debe ser instruido por la Dirección Nacional de Vialidad, ya que los caminos de la obra son públicos y nacionales y que son administrados por esta de conformidad a lo dispuesto por el DFL N°850 de 1997, del Ministerio de Obras Públicas.

Sostiene que la autorización para realizar los traslados postación, a pedido de su representada, recién se comunicó con fecha 10 de junio de 2013, a través de Ord. 6541 y Ord. 6559. En el mismo sentido, expone que si existe una obligación, esta es de carácter contractual y tiene origen en los presupuestos que su representada le entregó a la demandante, en respuesta a su requerimiento de fecha 18 de diciembre de 2012 y no a requerimiento de la Dirección Nacional de Vialidad.

Asimismo, arguye que si se considera que la fuente de la obligación no es el contrato sino el DFL N° 850, es el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Vialidad, la autoridad que tiene bajo su cargo la administración de los caminos de uso público, por lo que le correspondía al MOP, solicitar a su representada, el traslado de instalaciones y autorizarla, mediante resuelvo respectivo, para el uso de una nueva faja fiscal, lo que ocurrió muchos meses después de que Constructora San Felipe S.A. hubiese solicitado el presupuesto a mi representada. Afirma que pese a no ser notificada por la Dirección de Vialidad, igualmente respondió de buena fe la solicitud de Constructora San Felipe S.A., remitiendo con fecha 1 de febrero del 2013, los presupuestos para el traslado de las instalaciones.

Luego de reiterar las comunicaciones referidas a las solicitudes de presupuestos y rectificaciones, insiste que el retraso en la ejecución de la totalidad de su proyecto no es de responsabilidad de su representada, toda vez que no se ha demostrado que el traslado de postes e instalaciones debía ser previo a la construcción del camino, puesto que, si no existía nuevo camino, Edelayen se veía imposibilitado de trasladar estructuras hacia la faja de un nuevo camino que no existía porque la misma constructora no lo había terminado.



Foja: 1

Posteriormente, explica que su representada no se encuentra en mora, incluso que si se considerase que tenía una obligación, esta no se encontraba vencida, toda vez que el plazo para su cumplimiento no se había iniciado. Añade que para se iniciara el computo del plazo de 120 días para la ejecución de las faenas debían darse dos condiciones copulativamente, por un lado la aceptación del presupuesto a través del respectivo Oficio ORD y por otro, el pago de los presupuestos N°200/NA – 136 y N°200/NA – 140.

Por último, manifiesta la ausencia de culpa y/o dolo de su representada, destacando que esta efectuó las obras pese a no haberse cumplido por la contraria, los requisitos que se establecieron en la oferta remitida y a no haber recibido pago alguno. Al contrario, estima que la demandante si tuvo un actuar culposo y los ejemplifica señalando diversos actos que lo demostrarían;

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que el actor para acreditar los fundamentos que sirven de base a su acción se valieron de prueba documental, consistente en:

I.- Guardado bajo custodia N°3482-2015 de este tribunal:

1.- Copia simple de protocolización resolución N° 122 del Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Vialidad a Constructora San Felipe S.A.

2.- Copia simple de protocolización resolución N° 123 del Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Vialidad a Constructora San Felipe S.A.

3.- Carta N° 53/750641, remitida por Edelayesen a Constructora San Felipe S.A., de fecha 1 de febrero de 2013.

4.- Carta N° 54/750643, remitida por Edelayesen a Constructora San Felipe S.A., de fecha 1 de febrero de 2013.

5.- Cartas remitidas por Constructora San Felipe S.A. a Edelayesen de fechas 18 de diciembre de 2012, 22 y 26 de marzo de 2013.

6.- Cartas remitidas por Constructora San Felipe S.A. a Vialidad Región de Aysén de fecha 26 de abril, 28 de mayo, 5 de julio, 5 de septiembre, 11 de septiembre, 25 de octubre, todas del año 2013, y cartas de fecha 8, 9 y 27 de enero, 18 y 28 de febrero del año 2014, y de 20 de diciembre de 2012 a la que se adjunta información acerca del traslado de la postación.



Foja: 1

7.- Documento denominado Informe traslado postación Tramo I y II, de fecha 17 de diciembre de 2012.

8.- Formulario solicitud de presupuesto, remitido por Constructora San Felipe S.A. a Edelayesen, de fecha 18 de diciembre de 2012.

9.- Copias simples de facturas N° 0464707 y N° 0464708, emitidas por Edelayesen al Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad, de fecha 10 de junio de 2014.

II.- Guardado bajo custodia N°8247-2018 de este tribunal:

1.- Copia de informe técnico, junto a sus anexos, emitido por el Perito Judicial de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, don Carlos Valenzuela Molina, de fecha 6 de febrero de 2017.

III.- Agregados a la carpeta digital:

1.- Copia simple de carta remitida por Constructora San Felipe al Inspector Fiscal Vialidad Región de Aysén, de fecha 20 de diciembre de 2012.

2.- Copia simple de Informe de Inspección de Obra, emitido por la empresa asesora de la Inspección Fiscal, empresa Ingelog, de fecha 11 de enero de 2013.

3.- Copia simple de carta remitida por Constructora San Felipe al encargado comercial de proyecto de Edelayesen, de fecha 22 de marzo de 2013.

4.- Copia simple de carta remitida por Constructora San Felipe al encargado comercial de proyecto de Edelayesen, de fecha 26 de marzo de 2013.

5.- Copia simple de carta de presupuesto N° 200/NA-136, emitida por Edelayesen, de fecha 22 de mayo de 2013.

6.- Copia de carta remitida por Constructora San Felipe al Inspector Fiscal Patricio Durán, de fecha 28 de mayo de 2013.

7.- Copia simple de carta de presupuesto N° 200/NA-140, emitido por Edelayesen, de fecha 29 de mayo de 2013.

8.- Copia simple de Informe de Inspección de Obra, emitido por la empresa asesora de la Inspección Fiscal, empresa Ingelog, de fecha 04 de octubre de 2013.



Foja: 1

9.- Copia simple de ordinario N° 11430, emitido por el Director Nacional de Vialidad, de fecha 9 de octubre de 2013.

10.- Copia simple de ordinario N° 11432, emitido por el Director Nacional de Vialidad, de fecha 9 de octubre de 2013.

11.- Copia simple de carta remitida por Constructora San Felipe al Inspector Fiscal Dirección de Vialidad, código CSF/753-2013-304, de fecha 25 de octubre de 2013.

12.- Copia simple de carta remitida por Constructora San Felipe al Inspector Fiscal Dirección de Vialidad, código CSF/753-2013-313, de fecha 25 de octubre de 2013.

13.- Copia simple de carta remitida por Constructora San Felipe al Inspector Fiscal Dirección de Vialidad, código CSF/753-2014-350, de fecha 8 de enero de 2014.

14.- Copia simple de carta remitida por Constructora San Felipe al Inspector Fiscal Dirección de Vialidad, código CSF/752-2014-360, de fecha 9 de enero de 2014.

15.- Copia simple de carta remitida por Constructora San Felipe al Inspector Fiscal Dirección de Vialidad, código CSF/752-2014-366, de fecha 27 de enero de 2014.

16.- Copia simple de protocolización de fecha 12 de febrero de 2014, de resolución de la Dirección de Vialidad N° 459, de fecha 31 de enero de 2014.

17.- Copia simple de carta remitida por Constructora San Felipe a la Inspectora Fiscal Dirección de Vialidad, código CSF/752-2014-382, de fecha 18 de febrero de 2014.

18.- Copia simple de carta remitida por Constructora San Felipe al Inspector Fiscal Dirección de Vialidad, código CSF/753-2014-370, de fecha 28 de febrero de 2014.

19.- Copia simple de protocolización de fecha 11 de marzo de 2014, de resolución de la Dirección de Vialidad N° 891, de fecha 26 de febrero de 2014.

20.- Copia simple de ordinario N° 21, remitido por el Inspector fiscal de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de Aysén al Director Nacional de Vialidad, de fecha 17 de marzo de 2014.



Foja: 1

21.- Copia simple de minuta de reunión de la empresa asesora de la Inspección Fiscal, Zañartu Consultores de Ingeniería, de fecha 15 de mayo de 2014.

22.- Copia simple de protocolización de fecha 2 de julio de 2014, de resolución de la Dirección de Vialidad N° 2310, de fecha 27 de junio de 2014.

23.- Copia simple de protocolización de fecha 2 de julio de 2014, de resolución de la Dirección de Vialidad N° 2308, de fecha 27 de junio de 2014.

24.- Copia simple de protocolización de fecha 26 de agosto de 2014, de resolución de la Dirección de Vialidad N° 3144, de fecha 25 de agosto de 2014.

25.- Copia simple de certificado emitido por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 9 de octubre de 2018.

26.- Copia de contestación de la demanda, en los autos caratulados “Edelaysen con Fisco de Chile”, ante Juzgado Civil de Coyhaique, rol C-244-2018.

27.- Copia simple del documento denominado “Colilla Provisoria de Rut”, correspondiente al RUT 89126400-3 de San Felipe S.A., emitido por el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 29 de julio de 2014.

28.- Copia autorizada de la escritura pública de “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas Constructora San Felipe S.A.”, suscrita ante el Notario Público de Santiago Sergio Carmona Barrales, de fecha 09 de julio de 2014.

29.- Copia simple de inscripción rolante a fojas 17273 número 9908 del Registro de Comercio de Santiago del año 1982, de la sociedad San Felipe S.A.

30.- Copia simple de inscripción rolante a fojas 8846 número 7107 del Registro de Comercio de Santiago del año 1999.

31.- Copia simple de escritura pública de “Constitución de sociedad Constructora San Felipe Limitada, suscrita ante el Notario Público de Santiago Demetrio Gutiérrez, de fecha 16 de agosto de 1982.

IV.- Agregados al expediente materialmente:



Foja: 1

1.- A fojas 86, copia simple de ordinario N° 215, remitido por el Director Regional de Vialidad de la Región de Aysén al Gerente Comercial de Edelayen, de fecha 3 de marzo de 2014.

2.- A fojas 88, copia de inscripción del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago, respecto a la sociedad San Felipe S.A., de fecha 6 de septiembre de 2016.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, asimismo, la parte demandante hizo comparecer a estrados a los siguientes testigos:

1.- A fojas 296, don Freddy Alejandro Mira Rocco, ingeniero civil, a la época jefe de la zona sur, departamento de Construcción, Subdirección de Obras de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, quien interrogado al tenor del punto N° 1 de la interlocutoria de prueba, declara que dentro del contrato que se adjudica las obras básicas de la ruta 7 de Aysén existe un ítem que está contratado como valor proforma y se llama traslado de postación. Afirma que el contratista tiene que gestionar con la dueña de los servicios eléctricos el traslado de todos los postes que interfieren en las obras civiles. Señala que el traslado se hizo y se canceló por ambas partes. Estos hechos le constan atendido que visita los contratos en terreno y tiene acceso a los estados de pagos que se cursan durante la ejecución del contrato y las modificaciones a este. Expone que tuvo acceso a las cinco modificaciones del contrato (referido al que la demandada tuvo con Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas), una de ellas por el aumento del plazo por la demora del traslado de postación.

Contrainterrogado, sostiene que el contrato tenía un presupuesto oficial con un valor proforma que era inferior al presentado por Edelayen.

Asimismo, declara que dentro de dos modificaciones al contrato se aumentó el plazo original de forma extra proporcional, cuya justificación se basó según lo expresado por el Inspector fiscal del contrato, a la demora del traslado de deportación por parte de Edelayen.

2.- A fojas 299, don Cristian Alejandro Solís Chávez, ingeniero civil, quien interrogado al tenor de los puntos N° 1 y 3 del auto de prueba, expone que para realizar las obras era necesario el traslado de la postación que se encontraba dentro de la faja fiscal, dado que el proyecto implicaba



Foja: 1

una ampliación de la trasforma del camino, por lo que se realizaron gestiones para que la empresa eléctrica el traslado correspondiente.

Arguye que debido que la empresa eléctrica no hizo el traslado de postes, la empresa San Felipe debió solicitar a la Dirección de Vialidad el aumento del plazo de la ejecución de un hito, el cual fue autorizado. Destaca que la demora del traslado implica que la empresa San Felipe no puede cumplir el programa de trabajo establecido en los antecedente de la licitación o el vigente a la fecha, lo que implica mayores gastos generales que debe cumplir la empresa para evitar posibles multas por el incumplimiento en leyes laborales y entrega de la faena fuera de plazo.

Contrainterrogado, afirma que la empresa eléctrica solicitaba confirmación del presupuesto y el pago de éste para poder iniciar el traslado. Asevera que las condiciones que exigía la empresa eléctrica no fueron cumplidas, toda vez que el protocolo que exigía ésta no es el que establece la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que dispone que el traslado de la postación debe ser a costo del dueño de la instalación. Estos acontecimientos le constan debido a su desempeño como ingeniero visitador de los contratos del nivel central que ha tenido que fiscalizar.

3.- A fojas 302 comparece don Víctor Alex Dianta Lorca, ingeniero constructor, quien interrogado al tenor de los puntos N° 1, 2 y 3 de la interlocutoria de prueba, revela que fue testigo de las complicaciones y atrasos que le generaron el atraso de los servicios de postación, lo cual no le permitía ejecutar los trabajos de movimiento de tierra tanto como cortes como terraplenes. Estos hechos lo obligaban a mantener el equipo sin producción y por la ubicación de la obra le hacía imposible trasladarlo a otros contratos.

Afirma que si existió incumplimiento de los plazos por parte de Edelayesen, ya que la obra o contrato tenía que entregarse en septiembre del año 2013, pero se entregó efectivamente -y sólo el tramo I- en mayo del año 2014.

Repreguntado, asegura que si existieron perjuicios para la empresa contratista, ya que produjo molestias en plena época estival.

4.- A fojas 305, comparece don Juan Antonio Mellado Gjurinovic, ingeniero geomensor, quien interrogado al tenor de los puntos N° 1, 2 y 3



Foja: 1

de la resolución que recibió la causa a prueba, manifiesta que se desempeñó como jefe de terreno en el tramo II durante el periodo de marzo del año 2013 a febrero del año 2014. Explica que se encontró con la dificultad de una postación existente lo cual impedía la normal realización de las faenas.

Sostiene que el atraso de las obras significó una pérdida económica, atendido que no se pudo cumplir el contrato en la fecha estipulada en el contrato de obras públicas, alargándose con los respectivos gastos generales.

Contrainterrogado, señala que los plazos para la postación no deberían haber superado el mes de septiembre de 2013.

5.- A fojas 309, comparece don Jaime Rodrigo Hernández Acuña, ingeniero civil, quien interrogado al tenor de los puntos N° 1, 2 y 3 del auto de prueba, declara que en varios tramos existían postes que interferían e imposibilitaban la realización de trabajos, lo que significó que no pudieran realizar sus labores. De la misma forma, indica que tuvieron que mantener las maquinas, cancelar personal y todos los gastos generales asociados. Sostiene que la obra se atrasó aproximadamente ocho meses. Añade que las obras debían concluir en abril de 2014, pero que se postergaron, y ocasionó que recién se estuvieran trasladando los postes cuando el contrato tenía fecha de término.

En relación al punto N° 2, explica que el retraso significó un costo adicional de mano de obra y maquinaria, además la reputación de la empresa quedo dañada porque ante la comunidad y vialidad no desarrollaron la obra esperando el traslado de los postes.

Respecto al punto N° 3, menciona que los daños se debieron a que no se realizó el traslado de postación, lo que significó que recién se estuvieran trasladando los postes cuando el contrato tenía fecha de término.

6.- A fojas 311 comparece don Felipe Andrés Ravanal Parra, ingeniero geomensor, quien interrogado al tenor de los puntos N° 1, 2 y 3 de la interlocutoria de prueba, atestigua que se desempeñaba como ingeniero geomensor de la obra Tramo I, donde le constó que se realizó la cotización para el traslado de postación, el cual tenía un plazo de termino para septiembre del año 2013. Afirma que este plazo no se cumplió debido al incumplimiento de la empresa Edelayen, iniciando los trabajos de



Foja: 1

traslado en diciembre de 2013 concluyendo en marzo del año 2014 en el tramo II y en mayo del mismo año el tramo I.

Respecto al punto N° 2, sostiene que si existieron daños producto del atraso del traslado de portación ya que se tuvo que pedir un aumento de plazo de la obra incurriendo en mayores gastos generales. Del mismo modo, asevera que se vio menoscabado el nombre y reputación de San Felipe por el atraso del traslado de postación ya que la población la junta y los turistas que transitaban por la ruta se vieron afectados.

En relación al punto N° 3, afirma que si existe una causalidad dolosa o culpable de la empresa Edelayesen al no trasladar en forma oportuna en los plazos que se había indicado inicialmente en la cotización del traslado de postación.

Contrainterrogado, afirma que el presupuesto o cotización del traslado de postación tenía un plazo de 120 días para ser ejecutado.

7.- A fojas 314, comparece don Carlos Manuel Valenzuela Molina, ingeniero civil, quien primeramente ratifica la autoría del informe técnico acompañado a fojas 200 y previsto a fojas 211.

Interrogado respecto al tenor del punto N° 2 de la interlocutoria de prueba, declara que se le encargó un informe técnico respecto a la efectividad de los hechos y eventuales perjuicios económicos generados por la empresa Edelayesen por el atraso en la ejecución de las postaciones eléctricas. Afirma que pudo constatar que ambos contratos de obra (Tramo I y II) sufrieron importantes ampliaciones de plazo, todas ellas otorgadas por la autoridad respectiva, con ocasión de los retrasos producidos debido al traslado de las postaciones de tendido eléctrico.

Expone que quedó en evidencia que la contratista debió incurrir en mayores gastos generales o costos indirectos de las obras ejecutadas. Sostiene que esta alteración de la planificación de obras, genero sobre costos relacionados a improductividad de recursos de maquinaria y a la caída de los rendimientos de la mano de obra.

En relación al punto N° 3, explica que la causalidad entre los perjuicios sufridos y la acción de Edelayesen, está relacionada con la alteración de la planificación y de los programas de trabajo producida por los retrasos en la ejecución de los traslados del tendido eléctrico.



Foja: 1

8.- A fojas 316 comparece don Luis Alejandro Garcés Puentes, ingeniero geomensor, quien interrogado al tenor de los puntos N° 1, 2 y 3, declara que tuvo conocimiento de que San Felipe solicitó el traslado de postación a Edelayesen y que no se efectuó en los plazos establecidos. Añade que estos retrasos produjeron una demora en la ejecución de la obra e hizo que San Felipe debiese pedir prorrogas y modificaciones de fechas para poder terminar el contrato.

Además del mayor costo de gastos generales de la empresa, sostiene que el prestigio de la empresa se vio afectado por la demora de la entrega final, ya su empresa se caracteriza por entregar las obras en los plazos establecidos por el MOP.

Respecto al punto N° 3, revela que sí existe una relación directa, atendido que no trasladar una postación en las fechas establecidas, implicó que en aquellos tramos o sectores no se pudieron ejecutar obras, reiterando que los trabajos debían estar concluidos en septiembre de 2013, pero que finalmente culminaron en marzo de 2014 para el tramo II y en mayo del mismo año para el tramo I.

9.- A fojas 409 y siguientes, rola declaración por exhorto prestada por don Orlando Mauricio Manríquez Henríquez, ingeniero geomensor, quien al tenor del punto N° 1 de la resolución que recibió la causa a prueba, expone que su función en las obras era ser jefe de topografía para la empresa Zañartu Ingenieros Consultores Spa y era el encargado de entregar información al inspector fiscal en cuanto al avance de la obra, revisar estados de pago y darles visto bueno. Señala que el conflicto radica en que Edelayesen tenía que correr los postes que interferían en el nuevo trazado del camino y que se realizaron de forma tardía.

Agrega que estos hechos le constan atendido que su jefe directo asistía a las reuniones que tenían con el inspector fiscal y la empresa eléctrica; y en su calidad de validador de las cantidades de obras ejecutadas. Asimismo, sostiene que en la ejecución del contrato, San Felipe realizó tronaduras para ensanchar el camino existente y para adecuarse a los nuevos parámetros del diseño.

Interrogado, afirma que existe un protocolo en relación a las tronaduras, debiendo dar aviso por radio a la comunidad, a la empresa



Foja: 1

eléctrica y a los servicios que estén en el sector con siete días de antelación y un día antes se daba aviso por radio para ratificarlas.

En relación al punto N° 2, testifica que los turistas podían informarse mediante letreros informativos con el logo de la empresa, que la empresa contratista era la responsable de la obra. Asevera que la empresa sufrió daños en materia de gastos generales producto de la tardanza de los trabajos.

Contrainterrogado, menciona que los turistas reclamaban mucho por el estado del camino y que estos percances quedaron registrados en un libro de reclamos que se encontraban en todas las asesorías de inspección fiscal.

Asimismo, responde que no tuvo acceso a los presupuestos enviados a la empresa, desconociendo si el inicio de los trabajos de traslado de postación, estaban sujetos al cumplimiento de alguna condición, o si contenían plazos de caducidad. Añade que no obstante ello la tardanza era evidente, estaba todo construido y faltaba el traslado de los postes,

Respecto al punto N° 3, responde que la tardanza es de responsabilidad de Edelayesen;

TRIGÉSIMO CUARTO: Que a fojas 194 la demandante solicitó oficiar a la siguiente institución: Dirección Nacional de Vialidad para que informe acerca de los trabajos de traslado de postación que debía hacer la demandada Empresa Eléctrica de Aysén S.A., en especial la duración estimada, duración efectiva y remitir a este tribunal todas las comunicaciones enviadas a dicha empresa, durante el tiempo en que se efectuaron tales trabajos de traslado de postación; y acerca de si la demandada incurrió en retrasos en los trabajos de traslado de postación, sus causas y si fueron requeridos por la Dirección de Vialidad en orden a darle curso a tales obras, cuya respuesta consta a fojas 626 y se encuentra custodiada bajo la custodia N° 263-2019;

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, de conformidad al artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, este tribunal decretó como medida para mejor resolver la realización de un informe de peritos que fue solicitado por



Foja: 1

la demandante a fojas 197. El mencionado informe fue evacuado por el perito Luis Arancibia Bravo a fojas 750;

TRIGÉSIMO SEXTO: Que la parte demandada con el fin de acreditar sus alegaciones y defensas se valió de la siguiente prueba documental:

I.- Guardado bajo las custodia N°8526-2018 y N°8721-2018 de este tribunal:

1.- Documento denominado “INFORME PERITAJE ELÉCTRICO. Daño instalaciones sistema eléctrico Palena. Constructora San Felipe. Informe Final”, emitido por don Carlos Rodrigo Oyarzún Muñoz, de fecha 10 de agosto del año 2017.

II.- Guardado bajo las custodia N°8527-2018 y N°8722-2018 de este tribunal:

1.- Documento de denominado “INFORME PERITAJE TÉCNICO. Tardanza en realización de traslados de postación eléctrica en obra vial que se ejecutó en la Región de Aisén”, ANEXO 3: REPORTES DE FALLAS ELÉCTRICAS (DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFÍAS), emitido por don Cristian César Berríos Arredondo, de fecha 20 de marzo del año 2018.

2.- Documento denominado “INFORME PERITAJE TÉCNICO. Tardanza en realización de traslados de postación eléctrica en obra vial que se ejecutó en la Región de Aisén”, ANEXO 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA A TERRENO 04 DE NOVIEMBRE DE 2017, emitido por don Cristian César Berríos Arredondo, de fecha 20 de marzo del año 2018.

III.- Guardado bajo las custodia N°8528-2018 y N°8722-2018 de este tribunal:

1.- Documento denominado “INFORME PERITAJE TÉCNICO. Tardanza en realización de traslados de postación eléctrica en obra vial que se ejecutó en la Región de Aisén”, ANEXO 2: PLANIMETRÍA, emitido por don Cristian César Berríos Arredondo, de fecha 20 de marzo del año 2018.

IV.- Guardado bajo las custodia N°8529-2018 y N°8722-2018 de este tribunal:



Foja: 1

1.- Documento denominado TOMO I. TEXTO PRINCIPAL “INFORME PERITAJE TÉCNICO. Tardanza en realización de traslados de postación eléctrica en obra vial que se ejecutó en la Región de Aisén”, emitido por don Cristian César Berríos Arredondo, de fecha 20 de marzo del año 2018.

V.- Agregados a la carpeta digital:

1.- Documento denominado “INFORME PERITAJE TÉCNICO. Tardanza en realización de traslados de postación eléctrica en obra vial que se ejecutó en la Región de Aisén”, ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN, emitido por don Cristian César Berríos Arredondo, de fecha 20 de marzo del año 2018, además bajo custodia N°8722-2018, de este tribunal.

2.- Copia de Dictamen de Contraloría General de la República N° 065813N11, emitido por don Osvaldo Vargas Zincke, Contralor General de la República Subrogante, de fecha 18 de octubre del año 2011.

3.- Copia simple de Carta remitida por Constructora San Felipe a Edelayesen, CSF/753-2012-39, de fecha 18 de diciembre de 2012.

4.- Copia simple de Carta remitida por Edelayesen a Constructora San Felipe, CSF/753-2012-39, de fecha 01 de febrero de 2013.

5.- Copia simple de Carta remitida por Edelayesen a Constructora San Felipe, CSF/753-2012-39, de fecha 01 de febrero de 2013.

6.- Copia simple de Carta remitida por Edelayesen a la Dirección de Vialidad, dirigida N° EEA JC 004/847680, de fecha 06 de enero de 2014.

7.- Copia simple de Carta remitida por Constructora San Felipe a Edelayesen, CSF/753–2013–127, de fecha 22 de marzo de 2013.

8.- Copia simple de Presupuesto N° 200/NA–136, remitida por Edelayesen al Director Nacional de Vialidad, de fecha 22 de mayo de 2013.

9.- Copia simple de Presupuesto N° 200/NA–140, remitida por Edelayesen al Director Nacional de Vialidad, de fecha 22 de mayo de 2013.

10.- Copia simple de Ord. Número 569, remitido por el Director Regional de Vialidad a Edelayesen, de fecha 14 de junio de 2013.

11.- Copia simple de correo electrónico remitido por Sergio Novoa de la casilla sergio.novoa@saesa.cl a don Cristian Solís Chávez, de la Dirección de Vialidad, de fecha 28 de junio de 2013.



Foja: 1

12.- Copia simple de Ord. Número 22, remitido por el Inspector Fiscal de la Dirección de Vialidad de la Región de Aysén a Edelaysen, de fecha 19 de marzo de 2014.

13.- Copia simple de Ord. Número 23, remitido por el Inspector Fiscal de la Dirección de Vialidad de la Región de Aysén a Edelaysen, de fecha 19 de marzo de 2014.

14.- Copias simple de carta remitida por Edelaysen a Constructora San Felipe, de fecha 11 de junio de 2014.

15.- Copia simple de Factura N° 0464707, emitida por Edelaysen, de fecha 10 de junio del año 2014, por un valor de \$41.127.059.-.

16.- Copia simple de Factura N° 0464708, emitida por Edelaysen, de fecha 10 de junio del año 2014, por un valor de \$ 36.764.865.-.

17.- Copias simple de carta remitida por Edelaysen al Director Regional SEC de Aysén, de fecha 17 de abril de 2014.

18.- Copias simple de carta remitida por Edelaysen al Director Regional SEC de Aysén, de fecha 23 de junio de 2014.

19.- Captura de pantalla de comprobante de transferencia desde la cuenta corriente número 29576784 a la cuenta corriente del Banco BCI-Tbanc de Edelaysen, de fecha 22 de agosto del año 2014, por el monto de \$36.764.865.

20.- Copia simple de Carta remitida por Constructora San Felipe a Edelaysen, CSF/753-2012-39, de fecha 02 de septiembre de 2014.

21.- Copias de actuaciones en los autos caratulados “Edelaysen con Fisco de Chile”, rol C-244-2018, que comprenden: copia de la demanda, certificación de acredita poder, resolución que da curso a la demanda, certificación de la notificación de la demanda, copia de la contestación, copia de la réplica, resolución que tiene por evacuada la réplica y da traslado para la dúplica, copia de la dúplica, resolución que tiene por evacuada la dúplica y copia de escrito que solicita se reciba la causa a prueba.

22.- Copias simples de los documentos denominados “Reporte de fallas y daños”, emitidos Edelaysen por de fecha 09, 21 y 26 de octubre, 13 y 20 de noviembre, 10, 13 y 17 de diciembre, todos del año 2013; y 08, 09 y 13 de enero de 2014.



Foja: 1

23.- Copias simples de los documentos denominados “Reporte de fallas y daños”, emitidos Edelayesen por de fecha 17, 18, 21, 23 y 25 de enero, 03, 13 y 25 de febrero, 04 y 13 de marzo, todos del año 2014.

VI.- Agregados al expediente materialmente:

1.- A fojas 252, copia simple de correos electrónicos remitidos por Sebastián Andrés Foessel Muñoz de la casilla de correo Sebastian.foessel@saesa.cl a Patricio Durán, casilla de correo patricio.duran@mov.gov.cl, de fecha 11, 8 y 6 de enero de 2014.

2.- A fojas 253, copia simple de correo electrónico remitido por Luis Robles de la casilla de correo luis.robles@saesa.cl a Sebastián Andrés Foessel Muñoz, casilla de correo Sebastian.foessel@saesa.cl, de fecha 6 de enero de 2014.

3.- A fojas 254, set de 9 fotografías de las obras ejecutadas por Constructora San Felipe, de fecha 06 de enero de 2014;

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que la parte demandada principal rindió prueba testimonial haciendo comparecer a estrados los siguientes testigos:

1.- A fojas 319, comparece don Cristian César Berríos Arredondo, ingeniero civil en obras civiles, quien al tenor del punto N° 1 del auto de prueba, declara que es de su autoría el informe acompañado por Edelayesen con fecha 18 de octubre de 2018.

Contrainterrogado, asegura que los antecedentes respecto a los cuales elaboró el informe fueron suministrados por Edelayesen, consistente en los documentos contractuales del contrato entre San Felipe y Vialidad de Aysén. Manifiesta que la documentación referida a cuestiones administrativas de los contratos con el MOP fue obtenida por el mismo.

Finalmente, indica que no es designado por alguna de las Cortes de Apelaciones.

2.- A fojas 540, comparece don Carlos Rodrigo Oyarzun Muñoz, ingeniero civil eléctrico, quien interrogado al tenor del punto N° 5 del auto de prueba, expone que se originaron daños a las instalaciones eléctricas de Edelayesen a consecuencia de las obras de ensanchamiento de la ruta 7 que estaban a cargo de la Constructora San Felipe. Estos hechos le constan por



Foja: 1

la información contenida en los letreros que anunciaba las obras viales que se estaban llevando a cabo.

Añade que la causa del daño se originó principalmente por obras viales como ensanchamiento, explosivos y movimiento de tierra que afectaron directamente el tendido eléctrico produciendo cortes de este y quiebres de postes de hormigón que soportan el mismo tendido.

Arguye que la valorización de los daños solo consideró el reemplazo de las obras eléctricas afectadas y la energía no siniestrada que se dejó de vender a los clientes afectados que mantienen contrato se suministró regulado, no considerando la energía suministrada a los contratos con contrato de cliente libre y las multas de la SEC aplica a las empresas eléctricas por la mala calidad del servicio.

Interrogado, reconoce la autoría del informe acompañado titulado “Informe peritaje eléctrico, “Daño instalaciones sistema eléctrico Palena”, Constructora San Felipe de Julio de 2017”.

Contrainterrogado, manifiesta que la fecha de la constatación de los daños referidos se refiere a las fallas originadas entre los años 2012 y 2015.

3.- A fojas 541, comparece don Patricio Hernán Shaw Silva, ingeniero de ejecución en electricidad, quien interrogado al tenor del punto N° 1, revela que existió un vínculo contractual a través de los presupuestos emitidos por Edelayen, los cuales fueron emitidos en febrero de 2013 y modificados en mayo del mismo año. Agrega que dichos presupuestos debían contar con tres elementos fundamentales, como lo son la aprobación a través de una notificación por parte del MOP, tramitación de permisos sectoriales y el pago del presupuesto para dar inicio a la ejecución de las obras. En el mismo sentido, aclara que la notificación por parte del MOP a Edelayen se produjo diez meses después de haber sido emitidos los presupuestos definitivos y el pago se hizo entre agosto y septiembre del año 2014.

Afirma que estos hechos le constan atendido que fue el encargado de recopilar y de haber tenido a la vista tantos los presupuestos, los ordinarios enviados al MOP y los comprobantes de pago y transferencias.

Contrainterrogado, afirma que para los presupuestos emitidos en febrero de 2013, la información fue recepcionada en diciembre del año



Foja: 1

2012 y para los finales de mayo de 2013, fueron recepcionados en el mes marzo-abril del año 2013.

Asevera que Edelayesen debía recibir el pago anticipado por la ejecución, de acuerdo a las cartas presupuesto enviadas en mayo del año 2013, quedo establecido que el inicio de las obras queda condicionada al pago de dicho presupuesto, cuestión que no cumplió Constructora San Felipe, pagando solamente en fecha posterior a la ejecución de las obras.

En relación al punto N° 2, señala que Edelayesen cumplió con todas sus obligaciones más no así la Constructora San Felipe, quien no realizó el pago de los presupuestos antes de la fecha de ejecución de las obras.

Respecto al punto N° 3, explica que Edelayesen actuó de buena fe al comenzar las obras sin el respectivo pago de los presupuestos.

En cuanto al punto N° 4, indica que las líneas eléctricas de propiedad de Edelayesen sufrieron graves daños producto del destrozo total o parcial tanto de postes de concreto armado como de los conductores de media tensión que alimentan a sus clientes, producto de la irresponsabilidad de Constructora San Felipe. Aduce que este tipo de eventos sucedió mayoritariamente entre los años 2013 y 2014.

Interrogado, menciona que no existieron documentos u otro tipo de comunicación con Constructora San Felipe que coordinara alguna de las tronaduras que ellos realizaban en la ruta Santa Lucía-La Junta.

Contrainterrogado, arguye que los informes de Interrupción de Suministro Eléctrico son confeccionados por las Brigadas de Operaciones de La Empresa Eléctrica de Aysén S.A.

En relación al punto N° 5, reitera que las instalaciones de distribución de la Empresa Eléctrica de Aysén S.A. sufrieron daños graves, producto de las tronaduras y a su vez, pérdida de suministro para sus clientes. Añade que los daños ocasionados los avalúa en un monto aproximado de \$3.000.000.- por cada una de las interrupciones de suministro.

Señala que estos hechos le constan por tener a la vista los informes de interrupciones de suministro que son presentados ante la SEC en calidad de probatorios de fuerza mayor no atangibles a Edelayesen.

Finalmente, respecto al punto N° 6, manifiesta que Constructora San Felipe jamás realizó coordinación alguna con Edelayesen, ya sea con su



Foja: 1

respectivo Encargado de Zona, Jefe de Distribución y Obra o Gerente General de Edelaysen.

4.- A fojas 566, consta declaración prestada por exhorto por don Marcos Joel Herrera Ovalle, liniero de operaciones, quien interrogado al punto N° 4, expone el daño producido a Edelaysen se produjo por corte de líneas, quebraduras de postes y tronaduras que realizó la empresa San Felipe. Agrega que como liniero de operaciones, debió concurrir al sector para reparar la falla para mantener un servicio al cliente efectivo y sin cortes.

Repreguntado, afirma que debido a las faenas de San Felipe se interrumpía el servicio, esto debido a que había cortes que duraban ocho horas por el desplazamiento de las brigadas y aproximado cuatro a cinco horas en reparar la falla.

En relación al punto N° 5, se le exhibe una fotografía que contiene “Reportes y fallos” con fechas desde el 9 de octubre de 2013 al 4 de marzo de 2014. Reconoce que son fotografías que el mismo tomó y que los reportes los realizaba el encargado de Sistema Palena, Futaleufú, Chaitén y La Junta.

En cuanto al punto N° 6, asegura que quien causa el daño es la empresa constructora que estaba trabajando en el lugar. En lo demás, se remite a lo respondido a los puntos N° 4 y 5.

5.- A fojas 570 comparece don Don Sergio Antonio Solís Solís, quien presta declaración por exhorto, ejecutivo de clientes, quien interrogado al tenor del punto N° 4 de la resolución que recibió la causa a prueba, revela que en la época de los trabajos en la ruta trabajaba en el ámbito comercial y generación, debiendo atender al público y recaudación en la que recibía los reclamos de los clientes. Aclara que todos los días los clientes reclamaban por los cortes reiterados. Detalla que no solamente eran problemas de tronaduras sino que también de los camiones que salían con las torvas levantadas y pasaban a enganchar los cables provocando fallas.

Repreguntado, asevera que le constan estos hechos ya que escuchaba por radio cuando se les informaba a los delegados, ellos transmitían la información a Coyhaique, donde se encontraba debiendo imprimir informes relacionados. Asimismo, aclara que el tiempo de reposición, dependía de la



Foja: 1

falla, pero podía ser de 10 ó 11 horas del día siguiente. En caso de fallas pequeñas, se demoraban entre 6 y 8 horas considerando el traslado de las brigadas.

Respecto al punto N° 5, sostiene que se vio dañada la imagen, ya que cuando el cliente no recibe energía estable, asimila que es la empresa la que corta la luz. En ese sentido, indica que se le informó a la gente que la responsable no era Edelayesen sino que era debido a causas externas.

Seguidamente, se le exhiben fotografías, que reconoce algunas de su autoría, y el informe de fallas y daños, observando que el timbre de aquel es de Edelayesen y la firma de Sebastián Foessel.

En relación al punto N° 6, señala que es efectivo y se remite a lo respondido en el punto N° 4 y 5.

6.- A fojas 627, comparece don Denny Edgardo Vargas Rodríguez, quien declara por exhorto, refiere que es ingeniero en administración de empresas, quien interrogado al tenor del punto N° 4, informa que él trabajaba en Edelayesen cuando sucedieron los hechos materia de autos. Añade que por los trabajos de ensanchamiento se dañaron postes, se cortaron cables y se dañaba la continuidad de suministro a toda la parte sur en donde ellos tenían sus obras.

Repreguntado, sostiene que Constructora San Felipe solicitó en diciembre del año 2012 presupuesto por un traslado de postes con ocasión de un ensanchamiento de carretera y que se entregó en febrero del año 2013 y dicho presupuesto establecía como condiciones generales que debía ser pagado, entregarse todos los permisos por el lugar en que se proyectaba la nueva línea y en su caso la autorización del mandante que estaba de acuerdo por el presupuesto.

En relación al punto N° 5, menciona que se produjeron varios tipos de daños, entre cuales señala la destrucción de instalaciones, específicamente de distribución de energía eléctrica, tales como, postes, cortes de cable de cobre, daños en crucetas, pérdidas de suministros eléctricos a la zona sur y daños a particulares por cortes intempestivos. Añade que estos hechos, implicaba mover a una cantidad importante de personas para realizar las reparaciones correspondientes.



Foja: 1

Repreguntado, afirma que los sectores afectados por los cortes de suministro fueron, sector uno y dos hacia el sur, y que en este último comprendía el sector de Las Juntas, Puyuhuapi y Lago [sic] Verde. Asimismo, aclara que las fallas podían ser de dos horas hasta incluso nueve o diez horas, y las de mayor duración cuando no existía coordinación entre la empresa San Felipe y sus equipos.

En cuanto al punto N° 6, asegura que existió una negligencia, considerando que si solo se hubiera coordinado la hora y fecha de las tronaduras, Edelayson habría podido tomar algunas otras medidas de mitigación y también haber disminuido los tiempos de respuesta. Reitera que la coordinación debió existir con el encargado de sistemas Palena, señor Luis Robles.

7.- A fojas 630, comparece don Sergio Rafael Novoa Espinoza, quien declarando por exhorto señala ser ingeniero de ejecución en electricidad, quien interrogado al tenor del punto N° 1, declara que en aquel tiempo se desempeñaba como subgerente de proyectos y normas de media y baja tensión en Saesa y como representante del grupo ante la Dirección Nacional de Vialidad.

Repreguntado, manifiesta que el primer presupuesto para el traslado de postación fue solicitado por Constructora San Felipe S.A. en el mes de diciembre del año 2012. Asevera que a esto se respondió en el mes de febrero del año 2013. Señala que en marzo del año 2013 solicitan la ampliación del presupuesto ya que habían más postes que mover y una modificación del proyecto original. Afirma que la respuesta fue remitida en mayo del año 2013 a la Dirección Nacional de Vialidad, ya que este era el protocolo acordado para las comunicaciones de este tipo de obras, con copia a la Dirección Regional de Vialidad y a la Constructora San Felipe. En el mismo sentido, arguye que en el mes de junio reciben una carta de la Dirección Nacional de Vialidad que iban a hacer la ampliación de la ruta en el sector La Tolva.

Repreguntado, aclara que el protocolo de comunicación consistía en que la Dirección Nacional de Vialidad les indicaba que había adjudicado el trabajo de una zona y les solicitaba el traslado de las líneas. Indica que se preparaba un informe con el costo de las obras que era informado a la



Foja: 1

misma Dirección Nacional con copia a la Dirección Regional y esperaban la aprobación del presupuesto para comenzar con la ejecución de los trabajos.

Repreguntado, explica que la validez del presupuesto duraba alrededor de 60 y 90 días, y que regía desde el pago de este y la entrega de toda la documentación solicitada. De la misma forma, ratifica que las obras se iniciaron con anterioridad al pago correspondiente a Edelayesen, ya que los daños en sus instalaciones habían dejado sin suministros al sector o zona con mucha frecuencia.

Contrainterrogado, puntualiza que estos le constan debido a que le informaban desde la regional de Aysén, mediante fotografías e informe del tiempo que estuvo sin servicio.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, por no encontrarse controvertidos y ser coherente con la prueba rendida, se tendrán como hechos de la causa, los siguientes:

1.- Que, mediante los Decretos 122 y 123, ambos datados 22 de agosto de 2012, emanados de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, se encargó a Constructora San Felipe S.A. -hoy San Felipe S.A- la ejecución de las obras de mejoramiento del “Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (obras básicas) sector Límite Regional-La Tolva, Región de Aysén”, Tramos I y II.

2.- Que, para la conclusión del referido encargo se debía proceder al traslado de la postación de propiedad de Empresa Eléctrica de Aysén S.A., trabajos que fueron concluidos en el tramo I, el 15 de mayo de 2014, en tanto que en el tramo II, el 1 de marzo del mismo año.

3.- Que, con el objeto de obtener el pago de los trabajos señalados en el numeral que antecede, Empresa Eléctrica de Aysén S.A, emitió a nombre del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad, las facturas N° 0464707 y N° 0464708, ambas de 10 de junio de 2014;

EN CUANTO A LA DEMANDA PRINCIPAL

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, San Felipe S.A. demanda indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual y en subsidio



Foja: 1

por responsabilidad extracontractual. Funda el capítulo principal, en que su parte requería para la realización de las obras de mejoramiento que le fueron encomendadas, el traslado de la postación de propiedad de la demandada; añade que aquella, luego de haber recibido la información pertinente, hecho ocurrido los días 22 de marzo de 2013 y 26 de marzo del mismo año, se obligó a la traslación de los postes en el plazo de 120 días corridos, pero que sin embargo, la traslaciones recién concluyeron el 1 de marzo de 2014 y el 10 de junio de 2014, retrasos que generaron los perjuicios cuya indemnización demanda.

CUADRAGÉSIMO: Que, la demandada conjuntamente con controvertir los términos de la convención cuyo incumplimiento se alega, opone las excepciones de falta de legitimación activa de la demandante, y de la de contrato no cumplido;

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, para resolver la acción interpuesta se ha de tener presente que son requisitos copulativos del estatuto de responsabilidad contractual o elementos necesarios para que se genere la obligación de indemnizar, los siguientes: la capacidad (que se tiene por acreditada en autos, ya que aquella se constituye como la regla general, y no se ha invocado en la especie ninguna causal de incapacidad reconocida por el legislador), el incumplimiento del deudor (derivada de una obligación contractual previa), el perjuicio del acreedor, la relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios, la imputabilidad del deudor (dolo o culpa), la inexistencia de una causal de exención de responsabilidad y la mora del deudor;

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que, previo al análisis de fondo se abordará la excepción de falta de legitimación activa, defensa que se afincó que la demandante no habría demostrado estar en relación de identidad con Constructora San Felipe S.A., empresa a la que se le encargaron las sabidas obras de mejoramiento.

Para la resolución de esta defensa se dirá que la legitimación en la causa para el demandante o legitimación activa, consiste “en ser la persona



Foja: 1

que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda” (MATURANA, Miquel Cristian. *Disposiciones Comunes A Todo Procedimiento*, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, año 2009, pág. 46);

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, de la copia autorizada de la Inscripción efectuada en el Registro de Comercio de Santiago, rolante a fojas 88 y siguientes, consta que la Sociedad Constructora San Felipe S.A por escritura pública de 9 de julio de 2014, inscrita a fojas 51818 N° 32116 del mismo año, pasó a llamarse San Felipe S.A., en consecuencia, y radicándose la excepción en análisis, únicamente en la inexistencia de la relación de identidad entre la adjudicataria de las obras de mejoramiento de que se trata y la demandante, no cabe sino rechazarla;

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que, por su parte, la decisión sobre la excepción de contrato no cumplido, requiere en primer término, la verificación de un vínculo contractual y sus alcances, razón por la que se abordará –si procediere- una vez verificada la concurrencia de aquellos elementos.

Cabe resaltar que, pese a que el demandante pone de manifiesto la necesidad en que se encontraba el demandado de realizar el traslado de la postación, por así disponerlo expresamente el artículo 41 inciso final del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 de 1997, de igual forma acude para fundar este capítulo de la demanda, al compromiso asumido por el demandado, al remitir los presupuestos solicitados, en torno a finalizar los trabajos dentro de un determinado plazo, obligando – de ésta manera- al análisis de la pretensión en tal sentido.

En este orden de ideas, lo primero que se ha de observar es la inexistencia de un texto único que dé cuenta de las invocadas cláusulas contractuales, razón por la cual se hace necesario determinar si de la prueba rendida, aquéllas se desprenden. En tal contexto, se advierte que San Felipe S.A mediante misivas de 18 de diciembre de 2012, 22 y 26 de marzo de 2013 (documentos numerados con los guarismos 70 a 74 de la custodia



Foja: 1

N°3482-2015), efectuó solicitudes de presupuestos a Empresa Eléctrica de Aisén S.A., requerimientos que se evacuaron mediante comunicaciones suscritas por la demandada y dirigidas al Director Nacional de Vialidad, el 1 de febrero de 2013 (documentos numerados con los guarismos 64 a 79 de la custodia N°3482-2015) y el 22 y 29 de mayo del mismo año (Folio digital N°105), respectivamente;

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que las respuestas dadas por la demandada, fueron en lo sustancial idénticas, en ellas, conjuntamente con fijar un precio para el traslado de la postación, establece como último plazo para la vigencia de los presupuestos el transcurso de 90 días corridos desde su emisión; en las condiciones generales pone de carga del solicitante proporcionar todos los permisos sectoriales que fueren necesarios para la ejecución de las obras, así como las autorizaciones que se requiriesen, estableciendo en los puntos 2.5 que aquellos debían ser remitidos por el interesado, mediante carta conductora debidamente firmada, siendo aquella una condición esencial.

Fija como plazo de ejecución para los trabajos 120 días corridos, cómputo que se iniciaría en cuanto se cumpliesen las siguientes condiciones, a saber: se ponga a disposición de su parte el terreno para efectuar los traslados y construcciones nuevas, se pague el presupuesto y se haga entrega de las autorizaciones y permisos pertinentes; excluye para el cálculo del mencionado plazo, los retrasos imputables al interesado y los originados en reparos de la autoridad, u otros casos de fuerza mayor.

Finalmente, impone que la aceptación del presupuesto debe efectuarse por Oficio Ord. dirigido a la Subgerencia de Proyectos y Normas MT-BT., ubicada en calle Bulnes N°441, ciudad de Osorno, Región de los Lagos;

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que, con lo que hasta aquí se ha expuesto y razonado, surge la necesidad de determinar si las condiciones referidas precedentemente, pueden ser consideradas como configurativas de una oferta, al tenor de lo previsto en los artículos 96 y siguientes del Código de Comercio, interrogante a la cual se ha de responder negativamente.



Foja: 1

Así, utilizando los parámetros del derecho privado -que son aquellos sobre los cuales se ha planteado la demanda- se ha de recordar que la pretendida oferta se dirige a una persona distinta de aquélla que efectuó la supuesta invitación a contratar. Efectivamente, y pese a que San Felipe S.A. es quien solicita el presupuesto, Empresa Eléctrica de Aisén S.A. dirige sus respuestas al Director Nacional de Vialidad, precisando que la aceptación del presupuesto, y por ende de la oferta, debe realizarse por medio de Oficio Ord., o sea, de la entidad pública y no la demandante, razón por la que, malamente pudo formarse algún vínculo contractual –como el descrito en la demanda- a partir de los aludidos presupuestos.

Refuerza lo razonado, si se atiende a la calidad de servicio centralizado de la Administración del Estado que posee la Dirección de Vialidad, quien con su actuar obliga los bienes y recursos fiscales; pues como es sabido, para la obtención de servicios y adquisición de bienes muebles, la Administración se rige por las normas y principios contemplados en la Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en subsidio por las del derecho público, y sólo en defecto de las primeras, por las del derecho común. Además, no es posible soslayar que la demandada es concesionaria de un servicio de distribución de energía eléctrica, y por lo tanto, posee un marco jurídico preestablecido que la vincula con el Estado, el cual es desconocido para este tribunal, pero del que, sin lugar a dudas, el demandante no es parte;

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, por otro lado, resulta pertinente destacar que la actividad desplegada por el demandante, en torno a la traslación de la postación, se avienen con el cumplimiento de los deberes que le imponía su propio contrato de concesión, por cuanto aquel lo obligaba a instar por la ejecución de los cambios de servicio públicos que fueren necesarios para la realización de las obras. Al respecto, los Decretos Supremos 122 y 123, en virtud de los cuales se aprueban los convenios Ad-reféndum de trato directo (custodia N° 3482-2015 de este tribunal), en sus puntos 4.5.2 prescriben que: “Los cambios por servicios de utilidad pública no serán de cargo de la empresa contratista, quien sin embargo deberá



Foja: 1

responsabilizarse, a su costo, de realizar todas las gestiones que sean necesarias para la ejecución de tales cambios...”;

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que, por último, el demandante ha hablado del pago de los valores, por costos en el traslado de la postación, en modalidad proforma, sugiriendo con ello formación de un vínculo contractual entre las partes de este juicio, en los términos establecidos en las cláusulas 2.8 de los contratos de concesión, interpretación que no se ajusta al mérito de lo ocurrido. Efectivamente, la mencionada cláusula establece que las partidas por Valores proforma deben ser ejecutadas por un tercero, agregando que Dirección, reembolsará los valores pagados por la empresa contratista, para el caso la demandante; luego, de la apreciación de la prueba rendida se colige que el costo por el traslado de la postación fue soportado y pagado directamente por el Ministerio de Obras Públicas Dirección de Vialidad -y no a través del reembolso del precio- actuando el demandante únicamente como mandatario para el pago, situación que explica el que las facturas 0464707 y 0464708, ambas de 10 de junio de 2014, fueron emitidas a nombre de la entidad fiscal, sólo que entregadas al demandante mediante carta datada 11 de junio de 2014 (documentos en carpeta digital compartida folio 115).

La situación descrita en el párrafo que antecede, refleja las instrucciones entregadas por el Director Nacional de Vialidad en el Ord. 13552 de 29 de noviembre de 2012, por medio del cual regula el accionar de esa Dirección en relación con los proyectos de traslado de servicios públicos necesarios para la ejecución de las obras viales, cuyas vías estén bajo su tuición, y correspondan a licitaciones publicadas con posterioridad al 18 de octubre de 2011(custodia N° 263-2019), cuyo es el caso; instruye al efecto, la utilización de pago bajo la modalidad proforma, y dispone que el Inspector Fiscal (de la concesión en ejecución) deberá informar al contratista de la aceptación del proyecto y del presupuesto, para que éste proceda a gestionar el pago por el cambio de servicio correspondiente.

De las distinciones propuestas, se sigue que, la mención a los valores proforma se utilizó únicamente para fijar el precio de un servicio cuyos valores se desconocían, desde que no iban a ser ejecutados por el



Foja: 1

contratista, pero que en todo lo demás, se estaba a lo dispuesto en el punto 4.5.2. de los contratos, transcrito en el considerando que antecede;

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que, consiguientemente, al no verificarse la existencia de un vínculo contractual que una a las partes de este juicio, en las condiciones sostenidas por el demandante, se desechará la demanda principal, omitiéndose pronunciamiento acerca los demás elementos que hacen procedente una demanda por responsabilidad contractual, así como de las restantes defesas opuestas, entre ellas, sobre la excepción de contrato no cumplido;

QUINCUAGÉSIMO: Que, la demás prueba rendida, en particular el informe pericial y la declaración de los testigos no alteran lo resuelto, por cuanto ellos discurren sobre la base de una relación contractual cierta, vínculo que este tribunal ha descartado;

EN CUANTO A LA DEMANDA SUBSIDIARIA

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que, la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, se funda en la infracción al inciso final del artículo 41 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 de 1997, precepto que obligaría a la demandada a realizar el traslado de la postación, agregando que su cumplimiento tardío, constituye un hecho ilícito que al generar perjuicios deben ser resarcidos;

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Que, se ha de recordar que el artículo 1437 del Código Civil prescribe que las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad, fuente de las obligaciones que se diferencia de las restantes, pues en última instancia se podría estimar que siempre las obligaciones poseen una fuente



Foja: 1

legal; así, el delito o cuasidelito responde a la idea genérica de abstenerse a causar daños a otro, ambas fuentes poseen consagración ilegal, sin embargo se diferencian de la ley como fuente directa de las obligaciones porque requieren la comisión de un hecho ilícito, o la omisión culpable. Luego, y en lo que respecta a la responsabilidad extracontractual por la comisión de un ilícito civil, asentaremos que se requiere para su procedencia la capacidad, la existencia de una acción u omisión ilícita del agente, la culpa o dolo de su parte; el perjuicio o daño a la víctima; la relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido y, la ausencia de una causal de exención de responsabilidad;

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que, por tanto, la resolución del asunto pasa por determinar los alcances del inciso final del artículo 41 del Decreto con Fuerza de Ley 850, el cual dispone que: “En caso de que por cualquier motivo sea necesario cambiar la ubicación de estas instalaciones del lugar en que fueron autorizadas, este traslado será hecho por cuenta exclusiva del respectivo propietario o en las condiciones que se hayan fijado al otorgar el permiso o contrato de concesión respectivo”; de su tenor se desprende que el mandato que ella contiene es poner la traslación de “cuenta exclusiva del respectivo propietario”, es decir, es el costo de la traslación lo que debe asumir el propietario, y no como pretende la demandante el hecho de materializar la traslación, menos aún dentro de determinado plazo. Ergo, no podría concluirse que la ejecución tardía de la traslación de la postación pueda configurar un incumplimiento de la norma, menos aún llegar a constituir una conducta que podamos subsumir en la hipótesis fáctica que establece el artículo 2314 del Código Civil.

Cabe resaltar que la regla referente a que es “cuenta exclusiva del respectivo propietario”, rige sólo en defecto de lo establecido en el permiso o concesión otorgado al propietario de las instalaciones, las cuales son desconocidas para este tribunal, e impiden concluir a priori – y sin importar la forma que adopte el incumplimiento que se imputa- que se ha incurrido en una infracción a la norma, desde que ella misma abre la posibilidad de excepciones a la regla, razón por lo que también se rechazará la demanda en este extremo;



QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que, sin perjuicio de lo decidido, conviene tener presente que el artículo 51 de mencionado D.F.L. otorga la potestad a la Dirección de Vialidad para ordenar cumplir las medidas adoptadas, fijando un plazo prudencial para la ejecución de los trabajos; y, para el evento en que ello no se cumpla, prevé que: “la Dirección ordenará hacer el presupuesto de ellas, que servirá de título ejecutivo para cobrar su valor. Notificado al infractor y obtenidos los fondos, la obra se ejecutará con cargo a éstos”. Seguidamente, y también para el caso de incumplimiento de las obligaciones de que trata ese título – entre los cuales está el artículo 41- dota al Director de Vialidad de la posibilidad de imponer una multa, sin perjuicio de las sanciones que sean procedentes. Luego, y como se verá, las instrucciones en ese sentido carecieron de la claridad esperada, según dan cuanta las comunicaciones oficiales guardadas bajo la custodia N° 263-2019 de este tribunal, a saber:

1.- Por Ord. 6541 de 10 de junio de 2013, la Dirección de Vialidad fijó un plazo de 15 días para la traslación de postación y a costo de la demandada,

2.- Por Ord. 0569 de 14 de junio de 2013, solicitó aclaración en relación a diferencias de precios en los presupuestos.

3.- Por ORD. 11430 y 11432 de 9 de octubre 2013, instrumentos de orden interno de la Dirección, el Director Nacional de Vialidad comunica al Inspector Fiscal que se procede a la aprobación del proyecto, reservando el derecho a realizar las gestiones tendientes a recuperar los montos pagados;

4.- A continuación encontramos comunicación electrónica, rolante a fojas 613 y siguientes, entre ellos el correo de 14 de octubre de 2013 enviado desde la dirección de don Patricio Duran, Inspector Fiscal, a un correo de la casilla del grupo Saesa, del siguiente tenor: “Esteban: me informan desde Santiago que nuestro Director finalmente dio luz verde a los presupuesto. Al respecto tienes alguna noticia??? De ser positiva...cuando podríamos empezar con la coordinación para iniciar los trabajos”. Aquel es respondido con la misma fecha, y se señala, en lo que importa, que: “Estamos cargando los recursos al proyecto, solicitaremos los materiales y



Foja: 1

esperamos viajar a la zona la próxima semana...”; además, agrega que: “recordar eso sí que del presupuesto original existen modificaciones que no nos han solicitado formalmente considerar...”.

Posterior a ellos, existen algunos correos electrónicos entre las partes relativos a requerir respuesta sobre la fecha en que se comenzaría con el traslado de la postación; así, en el correo de 14 de noviembre de 2013 el demandado reconoce no haber comenzado los trabajos, y además solicita al Inspector Fiscal proporcionar determinados permisos de particulares, lo cuales habrían sido requeridos al evacuar los presupuestos.

5.- Por ORD. 215 de 3 de marzo 2014, el Director Regional de Vialidad pide a la demandada que informe sobre las razones de la tardanza en la traslación de la postación; añade que el Director Nacional con fecha 9 de octubre de 2013 aprobó los presupuestos enviados en mayo de 2013, y que a contar de ahí tenía un plazo de 120 días para realizar las labores.

6.- Por. Ord. 22 y 23 de 19 de marzo de 2014, don Patricio Duran, Inspector Fiscal comunica que por medio de los Ord. 11432 y 11430 - ambos descritos en el numeral 3 de este considerando- se aprobaron los presupuestos, reservándose la Administración los derechos para recuperar lo pagado.

Como se observa, si bien en una primera instancia la autoridad fijó un plazo para el cumplimiento del traslado de los postes, con posterioridad a ello no sólo no insiste en él, sino que además no existe una comunicación oficial dirigida al demandado, sino hasta el ORD. 215 de marzo de 2014, en el cual se reprocha el retraso, pero se hace referencia a un plazo de 120 días, presumiblemente el señalado en el presupuesto por el propio demandante, y no por la Administración como dispone el artículo 51 del D.F.L. 850, e instruye el Ord. 13552 de 29 de noviembre de 2012 (custodia N° 263-2019), previendo éste último una notificación del Director Nacional de Vialidad a las empresas que deban trasladar sus redes, dándole un plazo de 60 días corridos para aquello.

Seguidamente, no parece posible, ni aun estimando que el demandado poseía un plazo preestablecido para realizar la traslación, atribuirle a su conducta ilicitud, desde que no hubo una instrucción única



Foja: 1

por la autoridad competente en relación al plazo para desarrollar las obras, así como tampoco acerca del pago de los montos involucrados;

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que, en consecuencia, habiéndose descartado que la obligación de realizar la postación dentro de determinado plazo, esté comprendida en la norma que el demandante estima incumplida; y que, aún de estimarse que aquella impone la pretendida obligación, ha de entenderse que la tardanza acusada carece de la ilicitud, se desechará la demanda, por no verificarse el hecho ilícito en que se funda; omitiéndose pronunciamiento acerca de los demás elementos de la responsabilidad extracontractual, por resultar innecesario;

EN CUANTO A LA DEMANDA RECONVENCIONAL

QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Que el demandado principal demanda reconvencionalmente de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual a San Felipe S.A., esgrime que ésta, habría usado maquinaria pesada, cortado árboles y detonado explosivos de manera negligente, provocando daños a las instalaciones de la que es propietaria y cortes de energía eléctrica, generando los perjuicios que describe en la demanda;

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en lo relativo a los fundamentos de derecho, el demandante cita el artículo 2314 del Código Civil, es decir una responsabilidad general que requiere para su procedencia el cumplimiento de los requisitos señalados en el considerando quincuagésimo segundo de esta sentencia, y que es coherente con lo previsto en el Decreto Supremo 75 de 2 de febrero de 2004 emanado del Ministerio de Obras Públicas, por medio del cual se aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, norma que no excepciona al contratista de régimen general de responsabilidad en relación a los daños que se puedan ocasionar a terceros. Efectivamente, el inciso primero del artículo 134 dispone que: “Todo daño de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecución de la obra se cause a terceros, será de exclusiva responsabilidad del contratista”, diferenciándolos –claramente- en el inciso 3º, con los daños



Foja: 1

que pueda sufrir la obra en ejecución, en relación a la cual describe, que: “Dentro del mismo contexto, todo daño de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito, que por razones ajenas al MOP, sufran las obras durante el período de construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista y deberá ser reparado a su costa y cargo”;

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Que previo al análisis de los elementos de la responsabilidad, se han de abordar dos alegaciones efectuadas por la demandada reconvencional, por ser de carácter previo. La primera de ellas, dice asunto con la improcedencia de reservar en materia de responsabilidad extracontractual, la determinación de los perjuicios para la etapa de ejecución del fallo; tal alegación ha de ser desecha, pues si bien se comparte en parte lo planteado por la demandada reconvencional, no es posible obviar que Empresa Eléctrica de Aisén S.A rindió prueba sobre los supuestos perjuicios y entregó parámetros para determinarlos, siendo los perjuicios –además- materia de prueba de conformidad a lo establecido en el punto 5 del auto de prueba, fijado por resolución de 22 de marzo de 2018, razón por la que no resultaría posible desechar la demanda, sin conocer el fondo de la pretensión, y no afectar el principio de congruencia del procedimiento.

Luego, en relación a la alegación de improcedencia de una demanda por responsabilidad extracontractual, en atención a la existencia de un vínculo contractual entre las partes, se ha de rechazar no sólo porque se ha descartado la existencia de una relación convencional, sino que además porque el fundamento de esta pretensión no descansa en el incumplimiento contractual, sino en el supuesto actuar negligente del demandado reconvencional en la ejecución de las labores que desarrollaba, en virtud de su propio contrato de concesión.

Finalmente, el demandado reconvencional opone la excepción de falta de legitimación pasiva -indicando que su parte en modo alguno ha tenido participación en los hechos que se le imputan- la que también se desestimarás, desde que su fundamento no guarda relación con la misma, y se aviene más bien con una defensa; al respecto cabe recordar que la legitimación es apreciada con independencia de los hechos que se logren



Foja: 1

acreditar en el proceso, y estándose a la relación que el demandante o demandado posee con la legislación sustancial;

QUINCUAGÉSIMO NOVENO: Que, en lo tocante a la conducta ilícita del demandado reconvenicional, el demandante refiere el corte de árboles, uso de maquinaria pesada y utilización de explosivos de manera negligente, sin describir en que hace residir la negligencia, lo que sin lugar a dudas constituye un obstáculo para el éxito de su pretensión, sobre todo considerando que en este contexto, las tres acciones referidas, son –en principio- actividades permitidas por nuestro ordenamiento jurídico.

La falencia anotada no se supera con la apreciación de la prueba rendida, efectivamente la documental agregada como anexo 3 (Documentos rolantes de las páginas 2 a 123 del archivador II, de la custodia 8722-2018), consistentes en Reporte de Interrupción por Brigada (Documento que según declara el testigo Shaw Silva a fojas 547 es confeccionado por las Brigadas de Operaciones de La Empresa Eléctrica de Aisén S.A.) y constancias ante Carabineros de Chile, por corresponder en último término a declaraciones de la misma parte que los presenta, poseen escasa fuerza probatoria en contra de quien se intentan hacer valer; debe observarse, además, que sólo en las constancias policiales se alude a las causas que habrían generado los cortes, omitiéndose toda mención a los factores de responsabilidad, así –y a vía de ejemplo- “afirmar una fuerte perturbación en el sistema eléctrico, con sobre corrientes”... “porque rocas habrían impactado las líneas de media tensión”, no deriva en una imputación de negligencia necesaria hacia a San Felipe S.A., ya que para ello sería necesario establecer el estado que debían y que efectivamente poseían las líneas eléctricas al momento de los eventos, o si la contratista dio cumplimiento a las medidas que debía implementar o utilizaba la maquinaria correspondiente, o si la autoridad administrativa realizó las gestiones de coordinación impuestas por la Ley, tópicos sobre los cuales no se ha rendido prueba, impidiendo a este tribunal reconstruir el actuar negligente que se acusa.

De la misma forma, y en lo relacionado con el documento denominado Informe de Peritaje eléctrico de julio de 2017 (guardado bajo custodia 8721-2018 de este tribunal), y considerando que, conforme a lo



Foja: 1

descrito en el libelo pretensor, los daños en la red eléctrica se habrían producido entre el 9 de octubre de 2013 y el 28 de abril de 2014 –según se detalla en la demanda- en primer lugar, que correspondiendo a la demandante la mantención y conservación de las líneas eléctricas, haya sido posible para el informante observar los referidos daños, ya sea a la fecha en que éste efectuó la supuesta visita (21 de enero de 2016) o a la que se solicitó el informe (13 de julio de 2017); y en segundo lugar, también sorprende que el informante atribuya a la demandada reconvencional la autoría de los daños, únicamente porque a la época en que ocurrieron, ésta realizaba labores en los tramos asociados a las fallas.

Por otro lado, y en relación a la prueba testimonial rendida por Empresa Eléctrica de Aisén S.A, se debe señalar que sin perjuicio de que los testigos están contestes en que la demandada provocó cortes de luz, no precisan las fechas exactas en que ello habría ocurrido. Luego, en lo atinente a cómo se habrían provocado aquellos daños, las declaraciones de fojas 541, 566, 577, 627, prestadas por los testigos Shaw Silva, Herrera Ovalle, Solís Solís, y Vargas Rodríguez, respectivamente, lo atribuyen al uso de explosivos, agregando el testigo Herrera Ovalle que el manejo de maquinaria pesada era imprudente. Sin embargo, y en lo que respecta a explicar las razones para atribuir a San Felipe S.A. un actuar negligente, son escuetos, refiriendo –sin mayor detalle- la falta de aviso de San Felipe S.A. sobre las labores de detonación de explosivos (declaraciones de fojas 451, 627), no apareciendo como verosímil que la demandada reconvencional haya procedido al uso de explosivos, sin dar los avisos competentes, y que no exista una sanción por aquel hecho; asimismo, y en cuanto al uso de maquinaria de manera imprudente, la declaración de fojas 566 resulta del todo insuficiente al efecto, razón que conduce al rechazo de la demanda;

SEXAGÉSIMO: Que, por otro lado, se debe tener presente que el uso de explosivos, es una conducta que se encuentra reglada de conformidad a lo establecido en la Ley 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares y su Reglamento, contenido en el Decreto 50 de 28 de febrero de 1973, emanado de Ministerio de Defensa Nacional; cuerpos



Foja: 1

normativos que además de contemplar tipos penales -supuestos no invocados- reglamentan la tenencia, posesión e incluso el uso de alguno de los elementos a los que ellos se aplican.

Seguidamente, el artículo 1º de la Ley entrega al Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección General de Movilización Nacional la supervigilancia y control de armas y explosivos, quedando estos últimos sometidos a ésta fiscalización por disposición expresa de la letra d) del artículo 2 de mencionada Ley. En tal orden de ideas, se debe tener presente que el uso de explosivos por parte de aquellas personas que, por las características propias de su trabajo, tienen la necesidad ineludible de hacer uso de explosivos, como lo serían las firmas constructoras, especialmente las relacionadas con Obras Públicas, son calificados por el Reglamento como consumidores habituales de explosivos, quedando sujetos a registro, y constituyéndose el desempeño de aquella actividad en una de naturaleza normada; de manera que, plantear la existencia de negligencia, impone a determinar, específicamente, con cuál, o cuáles condiciones del proceso relativas al manejo de explosivos, no se cumplieron o se cumplieron imperfectamente;

SEXAGÉSIMO PRIMERO: Que, refuerza lo concluido, el que de los antecedentes del proceso no se desprendan reparos de la actividad del demandado reconvencional en este aspecto, sobre todo en lo tocante a la manipulación de explosivos, pues los contratos de concesión establecían que: "4.14 uso y manejo de explosivos, se rige por la ley sobre uso de armas y explosivos, y deberá informar al Inspector Fiscal y presentar todos los permisos correspondientes cada vez que se requiera el uso de explosivos en faena". En consecuencia, siendo una de las materias que debían ser informadas al Inspector Fiscal, llama la atención que no exista algún de reproche por parte de la Administración en este orden, o correspondencia en que se consigne.

Así como también sorprende, la ausencia de reproche oportuno de la demandante reconvencional, como sí ocurrió a propósito de los deslizamientos de material en el dm 278100 a dm278220, que provocó una situación de riesgo para la estabilidad del poste eléctrico ubicado en dicho



Foja: 1

sector, y del cual da cuenta el ORD. 0058 de 21 de enero de 2014 emanado de la Dirección de Vialidad (custodia N° 263-2019), pues aquella situación fue enérgicamente representada por la Empresa Eléctrica de Aisén S.A, según se desprende de los correos electrónicos rolantes a fojas 252 y siguientes.

Finalmente, la conducta negligente denunciada, tampoco se condice con el acta de recepción definitiva de 30 de noviembre de 2015, a la cual se adjunta el Formulario de Ratificación de Calificación de Contratista D.S. n° 75/2004 (Custodia 263-2019), en que se calificó al contratista con nota 6.51 de 7.0, dando cuenta de una un desempeño positivo, y en cuyo ítem “Uso de Garantías” -entre las cuales ha de comprenderse la de daños a terceros- se consigna que “no hubo uso de garantías”, en tanto que la glosa relativa a las multas se encuentra en blanco;

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que, en consecuencia, al no poder determinar que ha mediado un actuar ilícito o negligente por parte de la demandada reconvencional en la utilización de los explosivos, corte de árboles y maquinaria pesada, no queda sino desechar la demanda reconvencional, omitiéndose pronunciamiento acerca de los demás elementos de la responsabilidad civil extracontractual por resultar innecesario;

SEXAGÉSIMO TERCERO: Que, la prueba que no fue mencionada no afecta lo decidido, desde que el rechazo de las pretensiones interpuestas, se funda principalmente en la forma defectuosa en que han sido planteadas;

SEXAGÉSIMO CUARTO: Que, resultando todas las acciones desechadas, cada parte asumirá sus costas;

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículos 1545, 2314, 1698 del Código Civil, artículos 24 y siguientes del D.F.L 850, y artículos 144, 170, 341 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **SE DECLARA** que:



Foja: 1

I.- Se **rechaza** la excepción de falta de legitimación activa opuesta por Empresa Eléctrica de Aisén S.A en lo principal de fojas 42.

II.- Se **rechaza** la excepción de falsa de legitimación pasiva opuesta por San Felipe S.A. a fojas 123, así como también **se rechazan** las defensas de improcedencia de la demanda, fundadas en la existencia de vínculo contractual previo y reserva de perjuicios.

III.- Se **rechazan** las causales de inhabilidad deducidas por la parte demandada principal en relación a los testigos Juan Antonio Mellado Gjurinovic, Felipe Andrés Ravanal Parra, Luis Alejandro Garcés Puentes, Orlando Mauricio Manríquez Henríquez; así como también las de la parte demandante principal en relación a los testigos Patricio Hernán Shaw Silva, Marcos Joel Herrera Ovalle, Sergio Antonio Solís Solís y Sergio Rafael Novoa Espinosa.

IV.- Se **rechaza** la demanda principal y subsidiaria, deducida a fojas 1 por San Felipe S. A. en contra de Empresa Eléctrica de Aisén S.A.

V.- Se **rechaza** la demanda reconvenzional deducida en el segundo otrosí de fojas 42 deducida por Empresa Eléctrica de Aisén S.A.en contra de San Felipe S. A.

VI.- Cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívense los autos.

Nº12102-2015.-

DICTADA POR DOÑA CAROLINA RAMIREZ REYES, JUEZ TITULAR.

AUTORIZADA POR DOÑA IRENE ESPINOZA NEUPERT, SECRETARIA SUBROGANTE.



Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diez de Febrero de dos mil veinte**

